

La Ciudad Futura

Revista de Cultura Socialista

Director Fundador: José Aricó (1931-1991). Directores: Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula. ISSN 0328-221X - N°54, Buenos Aires, Otoño 2003, \$5

Libros

Agenda de las brechas jurídicas que humillan a Latinoamérica
Roberto Gargarella

Una apuesta a la productividad de la Sociología
Hernán Charosky

Ensayo

Nobleza y servidumbre de la política
Michel Rocard

Salvatore Veca

Por una redefinición del espacio público democrático

Martín D. Sión
Cien días de Lula en el poder: ilusión en duda



La Argentina en un pantano

Se agravó la crisis y estas elecciones no son solución

Hacia la incertidumbre, Juan Carlos Portantiero • Después de un año, Jorge Tula • La exaltación y el desaliento, Edgardo Mocca • El incierto horizonte del "98" argentino, Gerardo Aboy Carlés

Un nuevo orden mundial

Escenarios de guerra y posguerra

EEUU se asume como la única democracia imperial moderna, Guillermo Ortiz • Por una oposición a lo evitable, Alejandro Bonvecchi • Nuevo régimen político, Martín Plot • La renuncia de un diplomático de los EEUU, Brady Kiesling

En este número

Las circunstancias en las que aparece esta edición no son alentadoras, precisamente. Tanto la situación de la Argentina como la internacional atraviesan un período de profunda conflictividad, sin mayores márgenes para imaginar desenlaces positivos. En nuestro país, el estado de colapso generalizado que se instaló a partir de diciembre de 2001 no ha hecho sino agravarse, pese al pretendido optimismo del Gobierno y sus expresiones próximas. Los indicadores sociales exhiben un panorama actual catastrófico que prefigura para la amplia mayoría del pueblo un futuro de calamidades infinitas. Las instituciones han llegado a un punto increíble de degradación y el sistema político se descompone día a día. Y no hay en el horizonte atisbos mínimamente serios de una perspectiva progresista capaz de hacerse cargo de la situación. Así, se corre el riesgo de naturalizar los terribles efectos de la crisis, sepultando la capacidad de espanto y la vocación de cambio de la ciudadanía. Es difícil entender qué significa, en esta situación, ser socialista, discernir qué podemos y, fundamentalmente, qué debemos hacer. Y en cuanto al terreno internacional, el ataque a Irak de los Estados Unidos y sus aliados

no sólo actualiza las cada vez más estremecedoras trazas de guerra por fuera de toda ley, sino que esboza el trazo de un nuevo orden mundial. Definitivamente se deja atrás la aspiración de soberanía y de igualdad entre las naciones, entronizando el modelo autoritario del régimen imperial impuesto por los Estados Unidos. Un mundo nuevo que no sorprende del todo, en verdad, pero que abre grandes interrogantes acerca del futuro del planeta, con inquietantes perspectivas para países de escaso peso estratégico y en graves crisis, como la Argentina. Este panorama tenso al máximo las contradicciones existentes, tanto en lo local como en el terreno internacional, y casi no ofrece aristas para el necesario optimismo de quienes, aun en semejante situación, apostamos al cambio y a la superación de los problemas actuales para la construcción de un porvenir de otro signo. No obstante, y tal como decíamos en nuestro editorial del primer número, es imprescindible bregar para "(...) que la miseria del presente no nos impida imaginar y trabajar por un proyecto de sociedad diferente (...)". El cuadro es terrible, como nunca, por eso es tiempo de renovar convicciones y compromisos. *Oswaldo Pedrosa*

Sumario

SE AGRAVÓ LA CRISIS Y ESTAS ELECCIONES NO SON SOLUCIÓN

Juan Carlos Portantiero: Hacia la incertidumbre	3
Jorge Tula: Después de un año	5
Edgardo Mocca: La exaltación y el desaliento	7
Gerardo Aboy Carlés: El incierto horizonte del "98" argentino	8

ESCENARIOS DE GUERRA Y POSGUERRA

Guillermo Ortiz: EEUU se asume como la única democracia imperial moderna	11
Alejandro Bonvecchi: Por una oposición a lo evitable	15
Martin Plot: Nuevo régimen político	19
Brady Kiesling: La renuncia de un diplomático de los EEUU	21

El artista: Alexander Calder (1898-1976), el mayor escultor norteamericano del siglo XX y uno de los grandes maestros de la pintura moderna, destacó en todos los medios expresivos. Aquí presentamos obras de su colección de tapices.

ARTÍCULOS

Martín D. Sión: Cien días de Lula en el poder: ilusión en duda	23
Salvatore Veca: Por una redefinición del espacio público democrático	25

LIBROS

Roberto Gargarella: Agenda de las brechas jurídicas que humillan a Latinoamérica	27
Hernán Charosky: Una apuesta a la productividad de la Sociología	29

ENSAYO

Michel Recard: Nobleza y servidumbre de la política	32
--	----

La Ciudad Futura

Moreno 1785, 6° piso, (1093) Buenos Aires, teléfonos 4372-3663 y 4805-0826, e-mail: apedrosa@ciudad.com.ar.

Director fundador: José Aricó (1931-1991). **Directores:** Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula. **Editor:** Oswaldo Pedrosa. **Consejo de redacción:** Gerardo Aboy Carlés, Gerardo Adrogue, Alejandro Bonvecchi, Fabián Bosser, Sergio Bufano, Franco Castiglioni, Horacio Crespo, Hernán Charosky, Sebastián Etchemendy, Javier Franzé, Marcelo Leiras, Ricardo Mazzorin, Edgardo Mocca, Guillermo Ortiz, Vicente Palermo.

Martin Plot, Ernesto Semán, Pablo Semán, Lucrecia Teixidó. **Comité asesor:** Emilio De Ipolo, Jorge Kors, Carlos Kreimer, Ricardo Nudelman, Oscar Terán. **Maqueta original:** Juan Pablo Renzi. **Administración:** Alejandro Jáuregui. **Distribución y armado:** Viviana Mozzi. **Corrección:** Violeta Collado y Carlos Astorelli. **Impresión:** Gráfica Integral, José Bonifacio 257, (1424) Buenos Aires. **Distribución:** Siglo XXI Argentina, Lavalle 1634, 11° A, (1048) Buenos Aires. **Registro de la Propiedad Intelectual:** Nº192675. **Suscripción anual:** Argentina, \$25. Exterior, US\$ 30. **Cheques y giro:** a la orden de Oswaldo Pedrosa.

La Argentina en un pantano

Se agravó la crisis y estas elecciones no son solución

Hace un año, *La Ciudad Futura* publicó el debate registrado en la mesa redonda "La crisis de la Argentina: en qué consiste, adónde puede llevarnos". El país atravesaba entonces jornadas extremadamente dramáticas, con una sensación de borde del abismo; eran los días iniciales del período de Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo y casi nadie imaginaba que llegaría al fin del mandato otorgado por la Asamblea Legislativa, esto es el 10 de diciembre del presente año. Y por cierto que no ha de llegar, aunque en rigor el acortamiento de su interinato no será el producto de las calamidades que un año atrás podían imaginarse. Es consecuencia del cálculo de supervivencia política puesto en acto por Eduardo Duhalde a mediados de 2002 cuando, ante el empeoramiento de la situación económica y una crisis político-social desbordante, vino ante sí los fantasmas de De la Rúa y de Rodríguez Saá, y tomó el atajo de una anticipación de las elecciones, apresurando un compromiso público de abandono del poder este 25 de mayo. Efectivamente, no se han producido los escenarios catastróficos que muchos anunciaban hace un año y no es

exagerado decir que el país, aunque con tensiones evidentes, ha recuperado un clima de cierta estabilidad social. Pero eso no significa que haya encontrado solución ninguno de los grandes problemas que generaron el colapso, ni mucho menos; al contrario, la situación se ha agravado de manera manifiesta y las grandes mayorías populares se encuentran en las peores condiciones jamás conocidas y ante un horizonte que condena sin remedio a las futuras generaciones. El cuadro se acentúa por la ausencia de alternativas progresistas, y el paisaje político, carente de alternativas, desmerece por completo la convocatoria electoral. Intentamos abordar el análisis de este escenario mediante una mesa redonda del *staff*, pero problemas de orden técnico no lo hicieron posible, por lo que publicamos las ponencias previstas para el frustrado debate. Estas reflexiones muestran amplias coincidencias, pero el interés mayor quizá se encuentre en los puntos de divergencia y en los interrogantes que plantean, en el intento de construir diagnósticos y posiciones útiles para un discurso de centroizquierda, cuya ausencia es una carga que pesa cada día más. *OP*

Hacia la incertidumbre

La idea central del autor es que, en el marco de colapso generalizado que vive el país, las próximas elecciones son, en rigor, mucho más parte del problema que de su solución. Tras un análisis de los principales rasgos del curso seguido por la situación durante el último año, puntualiza que la ausencia de una centroizquierda madura postergará la posibilidad de hacer que la crisis se convierta en oportunidad.

Juan Carlos Portantiero

Hace un año, en estos días nos reuníamos en medio del naufragio institucional para trazar un primer balance de la situación que yo definía entonces más que como de crisis, como de colapso, en la medida en que la expresión crisis me sugería la idea de proyectos en pugna—lo que supondría alguna productividad histórica—, y eso era precisamente lo que no se advertía en una sociedad donde se agrietaban las hegemonías pero no aparecía ninguna instancia contrahé-

gemonía a la vista. Pasado el tiempo, ¿qué nuevo balance podemos hacer, en vísperas de unas elecciones presidenciales que distan de otorgar claridad al panorama y sobre las que las sombras del pasado se ciernen amenazadoras?

Este mismo hecho me permite decir que estos comicios son mucho más parte de la crisis que de su solución. Fragmentado el cuerpo electoral como lo está y tan ausente el horizonte de propuestas superadoras, la Argentina parece dirigirse otra vez hacia la incertidumbre.

Pero algo ha cambiado, y esta suposición nos abre paso a la tarea de echar una mirada sobre el período de gobierno de Eduardo Duhalde, también truncado porque debería concluir—en el caso de haberse respetado la ajetreada Constitución—en diciembre de este año. En efecto, si los sucesos trágicos de diciembre de 2001 acabaron con dos presidentes, la manatza de "pique-teros" en Avellaneda presionó, como se recordará, para que el actual primer mandatario anunciara también su renuncia anticipada. A su Gobierno lo habíamos definido como un régimen de transición entendiendo que debía sentar las bases de una serie de reformas que concluyeran con el colapso de las instituciones, desde la moneda hasta el sistema político. Pero eso no sucedió y dicho Gobierno no ha sido de transición sino de manejo día por día de la emergencia (como el propio Duhalde lo ha definido), por lo que la mayoría de los gravísimos problemas de legitimidad se mantienen en su lozanía y muchos de ellos—por inercia del colapso—se han acentuado: el PBI

cayó en números históricos, la pobreza y la indigencia alcanzan a casi sesenta por ciento de los argentinos, la desocupación trepó a su nivel máximo y el salario real se depreció en alrededor de cincuenta por ciento. Es decir que, como lo muestran varios indicadores muy sensibles, hoy estamos peor que ayer.

Estos datos, sumados a la crisis de representación política, ayudaron al origen y/o la expansión de la movilización social directa, expresada durante el año en los "cacerolazos", las reuniones barriales y los piquetes. Las calles se transformaron en espacio para asambleas públicas de protesta, ocupadas por distintas y heterogéneas demandas, crecientemente manipuladas por pequeños grupos —tal el caso de los piquetes— cuya acción osciló entre la presión y un neofeudalismo que asoció, en competencia, al Gobierno y a los grupos rebeldes. El resultado no fue otro que un doble vacío institucional, con la política girando sobre sus propios ejes reproductivos y la sociedad moviéndose espasmodicamente sin una guía abarcadora, con liderazgos fragmentarios incapaces de superar el momento de la protesta.

Con este cuadro, el Gobierno suele decir que deja al país encaminado. ¿Hacia dónde? En realidad —y para tratar de ser justos— lo que sucedió este año es que los resultados no fueron tan catastróficos como los pronósticos efectuados por los gurúes económicos que habían defendido con fiereza a la Convertibilidad: en efecto, no se desató la hiperinflación, no se derrumbó el sistema democrático, ni se hundió el sistema financiero, ni se desencadenó una guerra civil. Es de justicia atribuir esos logros a la habilidad política del Presidente.

Pero, a la vez, nada se ha hecho con el apremiante tema de la deuda pública; el crédito interno y externo no existe; los saldos favorables del comercio exterior no tienen que ver con el aumento de las exportaciones sino con la disminución de las importaciones —muchas de ellas, imprescindibles para el crecimiento económico—, y la

Justicia por un lado y el sistema político por el otro no han sufrido ninguna reforma ni sustantiva ni siquiera superficial. Todas las tareas de la transición siguen pendientes: no hubo hiperinflación, pero la moneda se depreció tres veces y el precio de los bienes de consumo masivo creció ochenta por ciento; no hubo guerra civil, pero tenemos el récord de pobres e indigentes, y no hubo golpe militar, pero las instituciones siguen tan ilegítimas como antes. Por fin, los sucesos del 2 de marzo en Catamarca son una muestra de cómo pueden derumbarse también los derechos políticos cuando una patota —ante el silencio cómplice del Gobierno central— logra impedir un acto eleccionario.

La desocupación, la pobreza generalizada y la quiebra del Estado arrastraron con los derechos sociales; para la mayoría de la población se han conculcado los derechos civiles, dada la ausencia de seguridad jurídica; se perderán también los derechos políticos en un retorno a las viejas prácticas de los años 30?

Como decía, todas las tareas de la transición quedan pendientes. Ése es el cuadro con el que nos enfrentamos de cara a las elecciones presidenciales. Unas elecciones atípicas desde el punto de vista de nuestra tradición de bipolaridad del régimen político. La quiebra del bipartidismo peronista-radical, que desde 1945 sobrevivió a todos los avatares, aun los de largos períodos de gobiernos militares, parece ser el dato central de la política argentina. Con la UCR oficial en extinción, esos votos presumiblemente se distribuirán en un ala de centroizquierda y otra de centroderecha—Elisa Carrí y Ricardo López Murphy, respectivamente—, mientras el anémico Moreau se quedará con un puñado de fieles después de la catástrofe de los comicios internos.

En el peronismo, por su parte, las divergencias parecen a tal punto irreconciliables que irá dividido en tres líneas, cuya posibilidad de articulación futura parece difícil. De todas maneras, para el caso del peronismo (mucho más que para los fragmentos

radicales) las elecciones de abril servirán por el otro no han sufrido ninguna reforma ni sustantiva ni siquiera superficial. Todas las tareas de la transición siguen pendientes: no hubo hiperinflación, pero la moneda se depreció tres veces y el precio de los bienes de consumo masivo creció ochenta por ciento; no hubo guerra civil, pero tenemos el récord de pobres e indigentes, y no hubo golpe militar, pero las instituciones siguen tan ilegítimas como antes. Por fin, los sucesos del 2 de marzo en Catamarca son una muestra de cómo pueden derumbarse también los derechos políticos cuando una patota —ante el silencio cómplice del Gobierno central— logra impedir un acto eleccionario.

Vemos dibujarse en el horizonte político nacional, algunas fuerzas ideológicamente más consistentes que otras: una derecha republicana, encabezada por la coalición de López Murphy, y otra conservadora-populista —más en la tradición de Fresco que en la de Perón— protagonizada por Menem. Al costado, el discurso invariable de Rodríguez Sáa, que mezcla vapores de tradiciones, y el de una izquierda incapaz de unificarse en una prédica electoral y que durante todo el año, como he señalado, ha mostrado más una vocación de Intifada que una voluntad de construir hacia el futuro en la línea del PT brasileño o del Frente Amplio uruguayo.

Peru queda una gran vacancia: la de las voluntades ciudadanas que creyeron en la promesa de la Alianza más allá del fracaso de sus dirigencias. Esos votantes no tienen hoy fórmula: se desperdigarán en Carrí, en Bravo, en Kirchner, en lo que quede de la UCR y seguramente en el caudal que decidirá no votar.

Terminar con el bipartidismo puede ser un dato positivo, pero depende de cómo se salga de él, de cómo se lo supere: en Venezuela, dio lugar a un liderazgo bonapartista que fragmentó a la sociedad; en Italia, a un nuevo juego de coaliciones. No sabemos qué sucederá entre nosotros, que seguimos viviendo la intensidad de una crisis inédita. Lo que sí creo saber es que la ausencia de una centroizquierda madura demorará la posibilidad de que la crisis —según la socorrida imagen— se transforme en oportunidad. □

Después de un año

Desde una posición profundamente escéptica acerca del futuro inmediato de la situación política, económica y social, y de las posibilidades de cambio que pueden ofrecer las próximas elecciones, el autor propugna un recuento de lo político y la política, y plantea que en nuestro país es preciso elaborar nuevos proyectos imaginando un nuevo pacto entre democracia y capitalismo.

Jorge Tula

Pasó poco más de un año desde que la crisis argentina se manifestó y sobreviniera la sustitución de un presidente elegido mediante elecciones directas y que duró la mitad de su mandato, por presidentes elegidos en el Parlamento. Pasó más de un año desde que diversos sectores de la sociedad argentina salieran en gran cantidad a la plaza pública a expresar con una persistencia e intensidad desconocidas su profunda discrepancia con el gobierno de la cosa pública. Después de una década de gobierno menemista que generó más injusticias de las que se tiene memoria y lesiones sociales incommensurables, nada se hizo para cicatrizar esas heridas. Algunas tenues esperanzas al respecto se diluyeron al poco tiempo, y la ineptitud del Gobierno de De la Rúa incitó a una reacción popular inédita.

En un barco que desde hacía tiempo exhibía dificultades para navegar en mares tumultuosos y con timoneles desatentos o incompetentes para mantenerlo a flote, eran previsibles males mayores, pero preferíamos no darnos cuenta. Hasta que un día empezó a incendiarse. Se lograron apagar las llamas, pero siguen las brasas, muchas de las cuales son de los soportes de la nave. Se trata de cambiarlos, pero se necesita de inteligencia, de audacia y de quienes dirijan estas operaciones. Uno que otro tienen alguna de las aptitudes requeridas, pero carecen de las otras. En alguna de las diversas operaciones que se necesitan llevar a cabo, se empieza a transitar

por el camino adecuado; pero ante previsibles dificultades prevalece el temor. Es el caso, por ejemplo, para abandonar la metáfora, de la negociación de la deuda externa: uno de los temas centrales de las dificultades de la nave argentina. Sin un proyecto de mediano y largo plazo de crecimiento con equidad en la distribución de los ingresos que anteceda cualquier compromiso, se corre el riesgo de pagar cualquier precio. Así las cosas, con los acuerdos realizados, si bien nos distanciamos de la cesación de pagos como consecuencia de un cambio de actitud de quienes negocian del lado argentino, lo cual para este presente lleno de incertidumbres no es algo que se deba despreciar, se sigue aceptando el abandono de instrumentos de política eco-

nómica propia, y se aceptan condiciones que afectarán el futuro inmediato y mediano. Es el caso de la eliminación paulatina de los controles cambiarios y de la decisión de disminuir el gasto público, que por otro lado ya ha disminuido veinticinco por ciento en el último año. Lo mismo ocurre con la privatización de lo que queda de la banca estatal y con permitir la intromisión de organismos multilaterales en cuestiones internas como la renegociación con las empresas privatizadas. Cito este ejemplo deliberadamente porque se trata de uno de los logros que con insistencia exhibe este Gobierno.

Qué decir de la cuestión social e institucional. Sin olvidar las decisiones políticas y económicas que generaron el escenario actual, sabemos que se incrementó la desocupación y que los números que marcan los niveles de la pobreza no han dejado de crecer. Respecto de la cuestión institucional, sólo señalo un hecho que muestra la prosecución de su deterioro: la suspensión de las elecciones provinciales en Catamarca, donde tiene un rol excluyente uno de los más singulares e influyentes dirigentes del peronismo.

Por cierto que soy escéptico sobre el futuro inmediato. No creo que después de realizadas las elecciones nacionales y provinciales, se modifique mi estado de ánimo. Es que no puedo abandonar la convicción de que de situaciones como éstas se sale de otra manera.

Como ha sucedido en todos los momentos históricos en los que se manifiestan crisis de gran intensidad, la salida es más de tipo político que otra cosa, porque en circunstancias de esta naturaleza lo que está en juego es el futuro de la sociedad que padece la crisis. No está de más recordar en esta oportunidad que la política tiene la pretensión, por un lado, de orientar, de dar un sentido a la historia, y por otro, de darle un gobierno a la sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha producido una cisura, una discrepancia entre esa aspiración a la búsqueda del bien común de la sociedad (lo político) y la tramitación que es



Mujer árabe

(1969)

anhelo conlleva (la política).

Este distanciamiento entre lo político y la política es una de las expresiones de las situaciones de crisis como la que nos toca vivir y se profundiza con ella, pero a la vez, incita y obliga a buscar su reconciliación. Es una tarea de políticos e intelectuales. El esfuerzo del Grupo Fénix creó que va en ese sentido. Pero se trata de un primer paso.

Tal concepción de la política, de la Política con mayúscula, entendida como reencuentro de lo político y la política, permite advertir —o acaso obliga a entender— que para salir de ese gran atolladero que es la crisis hay que ir más allá de las reglas de juego hasta ahora aceptadas o acordadas; que no existe fatalidad alguna que empuje a cualquier país que sea a permanecer prisionero de un único modelo y a aceptar que existen soluciones y necesidades económicas impercederas. Se trata, entonces, de advertir que, aun en situaciones límite, está abierta siquiera una ventana que debería permitirnos ver que hay otros caminos.

Un país en el que las reglas de la economía política han generado una

hecatombe económica y social, y han desnudado que nos nunca antes la fragilidad de las instituciones, obliga al esfuerzo de imaginar nuevos criterios para la "orientación y el uso social de la producción", para la organización del trabajo y nuevos modos de regulación. Dicho de otra manera: se trata de elaborar nuevos proyectos, de imaginar un nuevo pacto entre capitalismo y democracia en nuestro país.

Confieso estar obsesionado por la idea de proyecto, porque vista desde cierta perspectiva, la política es proyecto, en el sentido de que se trata de una plataforma ideal que debe orientar al gobierno de una sociedad, en este caso de nuestra sociedad. Mis limitaciones me impiden encontrar otra expresión que sea distinta que la de "proyecto nacional". Y digo esto temeroso de que se entienda mal, porque utilizo en el contexto latinoamericano —y particularmente en el argentino—, una expresión como ésta puede prestarse a confusiones debido a que parece ir acompañada de ese gran peligro que es la tentación nacionalista, en un momento de una aún confusa "[...] dialéctica entre lo local y lo global. Y como el espesor histórico de la nacio-

nal o la identidad nacional es mayor todavía que la globalización, la reacción es cómo encontramos un lugar en el mundo si no es la nación" (Carlos Floria. "Hoy hay una tentación nacionalista en la Argentina", *Clarín*, 23/2/2003). Esto merecería una discusión especial que no creo estar en condiciones de llevarla a cabo, pero al respecto me limitaré a hacer dos aclaraciones. En este mundo globalizado, en el que parece no existir nada externo a él, siendo a considerar a las naciones y a las personas que la integran como energías culturales (y políticas) que —como dice Massimo Cacciari— están en movimiento y en relación, y que no son entidades rígidamente clasificables. Es cierto que estas consideraciones pueden ser leídas como una puesta entre paréntesis de nuestra historia, como una torpeza que impide ver nuestra incapacidad para abandonar las rémoras del pasado, pero me permito sospechar que varias cosas están cambiando.

La otra aclaración que deseo hacer es que con la expresión "proyecto nacional" aludo a varias cosas. Mencionaré algunas: búsqueda de caminos distintos para insertarnos en el mundo globalizado privilegiando los organismos regionales como el Mercosur, a los efectos de hacer uso de las ventajas que pueden ofrecer, y no sólo padecer sus desventajas; reelaborar la idea de Estado nacional, porque sin él no es posible la regulación social del mercado; un crecimiento económico estable; considerar el gasto público y el consumo interno como fundamentales; diseñar una política de producción para incrementar las exportaciones, pero con la conciencia de que no se puede crecer sólo produciendo para los mercados exteriores; proponer un nuevo modelo social orientado a la construcción de una ciudadanía social.

Pues bien, nada o poco de esto estuvo y está presente en este año de gobierno peronista. Tampoco se han presentado para lo inminente contienda electoral, al menos hasta ahora, propuestas serias y responsables que vayan en esta dirección. □

La exaltación y el desaliento

Con el expreso propósito de enhebrar esta intervención con un debate que está desarrollándose en otro circuito del medio intelectual, Mocca alude a la conceptualización de Richard Rorty sobre la "política normal" y la "política dramática". En el curso de su amplio recorrido comparativo de los diversos diagnósticos y propuestas, afirma que nos encontramos en una desalentadora situación de pantano político y fragmentación social; pero aun en ese cuadro se declara contrario al abstencionismo y al impulso del voto en blanco, y plantea la necesidad de elaborar una agenda reformista para el país.

Eldardo Mocca

En el debate que se desarrolló recientemente en el suplemento "Zona" de *Clarín* y a través del mailing del Club de Cultura Socialista José Aricó, se utilizó como recurso polémico una categorización con acentos "rortyanos": la política normal y la política dramática. En términos simplificados, la política normal es gradualista, negociadora y con una tendencia "partidocrática". Por su parte, la política dramática tiende a las posturas radicales y refundacionistas, y apela centralmente a procesos sociales que vienen "desde abajo". No faltará quien remita esta "novedad" a la vieja disputa entre reformistas y revolucionarios en la socialdemocracia de los primeros años de este siglo, lo que no sería justo, porque hasta donde sé, ésta es una discusión entre reformistas. Creo que es posible pensar la materia del debate de hoy sobre la base de esta alternativa.

En los meses posteriores al derrumbe político, cundió en la sociedad argentina un sentido común que oscilaba entre el entusiasmo regeneracionista y los temores a la quiebra institucional, con su consecuente salida autoritaria. Unos veían las asambleas, los cacerales y los piquetes como el despertar de una nueva y promisoriosa época política en el país, y otros entendían (entendíamos) centralmente el proceso de disolución de la autoridad política

como una grave amenaza.

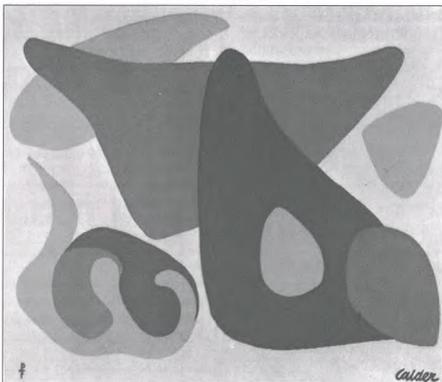
Esa escena se fue transformando en la medida en que la gestión de Duhalde fue planteando y desarrollando una agenda extremadamente simple. Pacificación social sobre la base del subsidio a jefes y jefas de hogar, estabilización de la cotización del dólar y de los precios, reinscripción en la comunidad internacional de negocios a través de la tortuosa negociación con el FMI, y armado de un cronograma electoral: fueron las modestas conquistas de una administración a la que, en varios momentos, nadie apostaba un peso devaluado. Es decir, poco y nada desde el punto de vista de la política "dramática": el país sigue sin afrontar la agenda grande del pago de su deuda y la reversión de un cuadro social espantoso de pobreza y desigualdad. Tampoco se dio paso alguno de consideración en el terreno de la reforma de sus instituciones; la Corte Suprema a través incólume una amenaza de juicio político que se disolvió subordinada a los cálculos de corto plazo de la gestión. Los partidos políticos no se han reformado, sino que más bien se han descompuesto en sus querrelas internas; aunque muy difícilmente el sistema partidario logre sobrevivir sin cambios en el futuro cercano. Las modificaciones en este sentido, sin embargo, parecen conducir más hacia una progresiva feudalización que a una coordinación nacional capaz de aportar a un sinceramiento progra-

mático y de proyectos políticos.

El terreno luce desolador para las perspectivas de una política "normal", por lo menos si ésta se pretende progresista. Vamos a tener un presidente que probablemente surja de una "interna peronista" con forma de elección nacional. Un presidente que, según los indicios actuales, difícilmente obtenga la cuarta parte de los votos válidos; que gobernará durante unos meses con el Congreso con su actual composición. Después tendremos elecciones parlamentarias y provinciales de las que muy probablemente emerja un parlamento fragmentado y un laberinto de caudillajes provinciales de muy problemática articulación nacional. En esas condiciones el país deberá afrontar enormes tensiones internas y externas. Todo eso si la Corte no desata en estos días el *big bang* de la redolarización de los depósitos cautiños del corralón y hace salir por el aire el frágil andamaje de la transición. Como se ve, desde el punto de vista de la "política normal" no solamente es difícil pensar en un curso progresista de los acontecimientos, sino también en la conservación de un grado mínimo de gobernabilidad democrática.

Para los progresistas partidarios de una "política normal", el futuro trae la promesa de una travesía en el desierto. Con razón, los partidarios de una "política dramática" nos interrogan sobre cómo podemos confiar en lograr cambios en el contexto de un régimen institucional que permitió la decadencia y de una clase política que la acompañó, y en no pocos casos, obtuvo de ella grandes beneficios. Los asombra que nos alegremos de que haya elecciones y que desalentemos el abstencionismo o el voto en blanco. Mucho más cuando en el menú de opciones para abrir casi no hay señales de reconocimiento del derrumbe político y de las exigencias sociales de renovación (el "casi" se agrega para que nadie pueda sentirse particularmente ofendido).

Ahora bien. Observemos el panorama preelectoral. Lo primero que apreciamos es que las expectativas de voto



Los tres amarillos

(1972)

negativo o abstención son muy parecidas al promedio histórico posterior a las elecciones de 1983. No es cierto – como se dice abundantemente en los medios de comunicación– que el hecho de que ningún candidato supere veinte por ciento es una señal de indiferencia ciudadana. Lo que existe es una inédita dispersión del voto, que constituye una pérdida apreciable de la centralidad de los partidos políticos como articuladores de preferencias; pero más de ochenta por ciento de la población parece rechazar en la práctica la consigna “que se vayan todos”. Como al pasar digo que se advierte poca reflexión sobre el rápido ocaso de esa demanda que pasó a ser *leitmotiv* de un gran número de políticos e intelectuales. Los tres candidatos que encabezaban los sondeos son el candidato de Duhalde, el ex presidente al que suponíamos echado por los encarcelamientos de la Ciudad de Buenos Aires y otro ex presidente que sustentó casi una década de gobierno en el difunto y vilipendiado régimen de Convertibilidad monetaria. Es significativo también que la demanda de “renovación total” del Congreso haya desaparecido del discurso central aun entre los candidatos que, como Néstor Kirchner y Elisa Carrió, hasta hace poco hacían girar toda su propuesta alrededor de esa consigna. Podríamos ir más lejos e internarnos en el panorama preelectoral de las provincias: lo que ocurrió el 2 de marzo en Catamarca opera como símbolo, pero seguramente vemos cómo partidos que se dan por desaparecidos ganan elecciones, y caudillos repudiados renuevan su poder.

Estamos hablando de procesos electorales que en la mayoría de los casos son libres y competitivos, en los que se manifiesta la voluntad popular sin otro condicionante que el *ethos* clientelista del que difícilmente nos saque ninguna refundación institucional.

El interrogante, entonces, es cuál es la fuerza capaz de refundar, cuáles son los actores, cuáles los líderes. Tengo la impresión de que el espejismo de la “democracia directa” que venía a reemplazar la corrupción propia de la democracia representativa es el fruto

de una frustración (o de varias frustraciones) en lo que concierne a la creación de una fuerza reformista poderosa y estratégicamente sustentable. Opera como un atajo discursivo capaz de aliviarnos de la legítima desazón que nos provocan el presente y el futuro cercano. La tarea de contribuir a la construcción de proyectos, actores y líderes en medio de una situación de pantano político y de fragmentación social es sumamente desalentadora. Más aun si se tienen en cuenta las experiencias de las que venimos. Sin embargo, esquivarla es, creo, reemplazar las asperezas de la política por el alivio espiritual de los buenos propósitos.

Es mi opinión que tarde o temprano, la discusión de la izquierda tiene

que centrarse en la elaboración de una agenda reformista para el país. El problema es que tenemos que decir desde el campo progresista sobre nuestra integración en el mundo, la reforma del Estado, el régimen impositivo, el federalismo argentino, las políticas sociales, el ingreso mínimo de inserción. Es una discusión que, estimo, debería sostenerse desde el supuesto de una potencial responsabilidad de gobierno en las actuales condiciones más que desde la postulación de objetivos abstractos o situaciones ideales. Si hoy no contamos con una fórmula que encarne esa agenda progresista, no se debe a ninguna trampa institucional diseñada por conspiradores antipopulares: es simplemente una expresión de nuestras insuficiencias. □

El incierto horizonte del “98” argentino

El título alude a la crisis española de 1898 que siguió a la derrota en la guerra con Estados Unidos y a la pérdida de Cuba y las Filipinas: la toma de conciencia acerca de la debilidad del país y de la necesidad de grandes transformaciones que, no obstante, resultaron diferidas en el plano político. Y desde allí el autor plantea que es impensable que la articulación de un nuevo sistema de país pueda ponerse en marcha a espaldas de las demandas de renovación y reparación presentes en el diciembre argentino de 2001.

Gerardo Aboy Carlés

El alejamiento de los tumultuosos días que marcaron el inicio del interinato de Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo parece hoy desdibujar las dramáticas circunstancias que aún asolan la vida social, económica y política del país.

Co-testador y legatario de una pesada herencia, el actual interinato de Duhalde tuvo los más críticos índices sociales de nuestra historia: 21,5 por ciento de desocupación en mayo del año pasado (reducidos a 17,8 por cien-

to en octubre) y un crecimiento incesante de la subocupación, que se ha colocado al borde de 20 por ciento. La pobreza, que era de 38,3 por ciento en las postrimerías de la pésima gestión aliancista, ha crecido ininterrumpidamente hasta ubicarse en 57,5 por ciento. En el mismo plazo, los indigentes han pasado de 13,6 a 27,5 por ciento. Sólo entre mayo y octubre de 2002, cayeron en la indigencia 1.645.000 nuevos habitantes, situación en la que están, según las últimas mediciones del INDEC, casi diez millones de argentinos. El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el

más importante de este tipo que ha sido llevado a cabo, no alcanza a cubrir al conjunto de indigentes ya que, como el propio Ministerio de Trabajo reconoce, 720 mil de los dos millones de planes se orientan hacia otros sectores. A lo largo de los últimos quince meses, los precios al consumidor han aumentado 42,8 por ciento, y llegaron a casi 56 por ciento en los alimentos básicos, todo ello en el marco de un congelamiento salarial de hecho, ya que no ha existido poder alguno de policía para el cumplimiento de los incrementos no remunerativos dispuestos.

Las compensaciones a que da lugar la pesificación asimétrica, la cuasificación de pasivos privados y el compromiso de rescate de los bonos provinciales estipulados por la actual gestión tras el colapso de la Convertibilidad que marcó el final del gobierno de De la Rúa, supondrán, al concluir el actual Gobierno, un aumento de alrededor de 40 mil millones de dólares en la deuda pública. Ello sin contar las nuevas erogaciones que se originarán a causa de los recientes fallos contrarios a la pesificación de los depósitos en dólares. Este pesado lastre deberá ser sobrelevado en el próximo período presidencial.

Si nos detenemos en esta enumeración es para poner en su justo lugar una situación que, a todas luces, parece bastante distante del oasis estival con el que algunos caracterizan los últimos meses, a partir de observar solamente el arrastre del superávit comercial impulsado por la subvaluación del peso y una política de ingresos absolutamente dependiente de las retenciones a las exportaciones. Toda salida de un régimen de cambio fijo es traumática, pero no nos engañemos: la supuesta meseta actual sólo fue alcanzada tras el brutal agravamiento de la situación económica y social caracterizado por la impericia y la permeabilidad a las presiones del *lobby* empresario durante el primer semestre de la gestión del gobierno interino.

En el plano político, la efervescen-

cia generalizada que signó el primer trimestre de 2002 ha dejado paso a la presencia regular de formas menos anárquicas y ligeramente más organizadas de protesta, frente a las cuales el poder político ha reaccionado con dosis alternativas de negociación y represión, conforme al seguidismo de los estados de ánimo de los sectores sociales más integrados.

La aguda crisis de legitimidad que atraviesa a la autoridad pública desde hace casi un año y medio parece muy lejos de haber alcanzado algún tipo de regeneración transformista. La degradación del término “política” que caracterizó la década del 90 estuvo y está a la orden del día en las filas oficialistas y opositoras. Ello no sólo por las contradicciones de la palabra presidencial en torno a la pesificación de los depósitos, sino también –entre diversos ejemplos posibles– por el sinuoso camino que marcaron las relaciones con la Corte Suprema. De la acusación al salvatage de todos sus miembros la negociación de sentencias por impunidad que pobló los titulares de todos los medios profundizó la degradación general de las instituciones en un juego en el que el

maximalismo de un lado y la complicidad con el viejo orden del otro obturaron la posibilidad de dar al menos una señal de cambio a la sociedad.

Lejos de cualquier renovación, estamos en las vísperas de un proceso electoral signado por el cierre defensivo de la antigua dirigencia política y marcado por la ilegalidad. Desde el menemismo hasta quienes hacen de la defensa de las instituciones su bandera, casi todas las fuerzas políticas han contribuido a degradar los mecanismos institucionales. Del conjunto de fórmulas que competirán el 27 de abril, sólo una fue electa conforme al sistema de internas abiertas dispuesto por las leyes 23.298 y 25.611. La excepción fueron los lamentables y bochornos cómicos internos de una UCR agonizante.

Las dos fuerzas políticas tradicionales del país sufren hoy amplios procesos de fragmentación que no son sino el último capítulo de la ardua reformulación de las viejas identidades iniciado con la recuperación democrática. Si la crisis de la UCR es evidente y la triple fragmentación de su antiguo electorado ha desembocado en la presencia de tres organiza-



El perfil que desaparece

(1973)

ciones distintas, no menor parece la crisis que atraviesa el peronismo con sus tres candidaturas. La reformulación identitaria que tuvo lugar en los 90 ha demostrado no ser asimilable por un actor de la complejidad del justicialismo. El viejo tópico de la unidad de la fuerza en las vísperas del posible acceso al poder parece haber quedado desmentido. En ausencia de un rival amenazante todo indicaría que el proceso de fragmentación del peronismo seguirá profundizándose en el futuro cercano.

La transformación del sistema político no surgirá de supuestos bolsones inmaculados de una sociedad en la que la degradación de la ley y de la solidaridad tienen una larga historia. La petulancia (política o intelectual) ha llevado a varios a caracterizar las distintas formas de protesta que han tenido lugar en el país en los últimos años como especies variadas de la "antipolítica". Debemos recordar que toda transformación del sistema político en nuestra historia, toda experiencia que marcó una frontera con el orden precedente, se constituyó en rivalidad con la política existente y sufrió a su turno la misma descalificación. No obstante, no debemos confundirnos: ni la estabilización del sistema político, ni la articulación de un proyecto de país, podrán tener lugar de espaldas a la demanda de renovación y reparación que se evidenció a partir de ese '98" argentino que constituyó diciembre de 2001.

En este contexto, poco podemos decir de la izquierda política y sus perspectivas. Nótese que utilizo el término izquierda y no "centroizquierda" o el aun más sinuoso mote de "progresismo". La recurrencia de las dos últimas nominaciones marca de por sí la cuasi inexistencia de una izquierda política institucional en el país. Desvela hasta qué punto la antigua tradición política sobrevive tan sólo en una dimensión cultural y en pequeñas organizaciones sociales. Si existiera una izquierda política e institucional, los intelectuales serían más precisos y no caerían en incorrectos eufemismos para intentar

deslindarse del folklore de pequeñas agrupaciones maximalistas. Creo entonces que el primer dato que tenemos que asimilar es el de esta ausencia. Ello tendría una doble ventaja: no avivar el fuego de nuevas frustraciones colectivas y comprender que la existencia de una izquierda de este tipo, con entidad propia, es un proceso lento, largo y dificultoso. Hemos abierto esperanzados nuestras páginas a la difícil experiencia del PT en Brasil; aprendamos pues de su propia historia. Poco lugar cabe a una izquierda de este tipo en nuestro futuro inmediato, su construcción es una empresa que demandará años y para ello es tan imprescindible recuperar una dimensión social de la política, atenta a las transformaciones que vive nuestro país, como evitar el cortoplacismo sin rumbo que tantas veces nos ha extraviado.

Argentina siempre fue una sociedad heterogénea pero su modernidad radica en la temprana homogeneización política que actuó como integradora de vastos sectores sociales. Hoy nos encaminamos a una elección en medio de una profunda crisis de legitimidad y en el marco de la doble fragmentación que no guarda correspondencia interna: de un lado, la fragmentación del sistema político, de otro, una inédita fragmentación social. En tal contexto no podemos esperar sino la emergencia de un gobierno débil y un marco de restricciones socioeconómicas, políticas e institucionales que harán sumamente dificultoso el despliegue de una "legitimidad de ejercicio" para la autoridad pública en el período 2003-2007.

Resulta paradójico que sea Eduardo Duhalde el encargado de conducir al país en la actual crisis. Sin dudas, fue el actual mandatario interino uno de los primeros dirigentes políticos en avizorar cabalmente la magnitud de la fragmentación social a la que había dado origen la lenta descomposición de la antigua matriz populista. Un fenómeno poco estudiado es la reestructuración del peronismo bonaense que, aunque

iniciada años antes, llega a su pleno desarrollo bajo el liderazgo de Duhalde: el paso de una organización basada en los actores creados a la sombra del mercado de trabajo, a una organización de base territorialmente capaz de dar cuenta políticamente de una amplia destrucción de antiguos grupos sociales. El lejano antecedente de una organización similar —aunque en un contexto muy diferente— es la vasta red del radicalismo bonaense tejida por Yrigoyen en los albores del siglo XX.

Con esta nueva territorialización de la política, que caracteriza no sólo al conurbano bonaense sino a los principales centros urbanos del país, ha tomado renovada fuerza la figura del pequeño "empresario" político: los liderazgos políticos o sociales muchas veces confinados a los límites barriales. Una gramática común recorre esta nueva geografía aun cuando sus integrantes ostentan orientaciones contrapuestas: la creciente autonomía respecto de los liderazgos centralizados, su capacidad de negociación, su enraizamiento local. Son rasgos éstos que progresivamente toman cuerpo en las distintas redes existentes en los principales conglomerados urbanos: la red territorial justicialista, la red articuladora de la protesta social (principalmente, los grupos piqueteros), la red de las organizaciones comunitarias de base barrial. La permeabilidad, los traspasos y la pluriafiliación a estas diferentes redes está bastante más extendida de lo que habitualmente se cree. Lejana a conformar un actor unificado, esta nueva geografía de la acción política difícilmente sea ajena al desempeño de un papel en la futura redefinición de los equilibrios políticos del país.

Si bien existen lentas transformaciones de las formas de organización social, el sistema político argentino aún no ha comenzado su transición: estamos todavía en medio de la crisis, crisis que deberá procesarse en los próximos años y que puede desembocar en un mapa político cuyas principales características y actores estamos aún lejos de avizorar. □

Un nuevo orden mundial

Escenarios de guerra y posguerra

El ataque de los Estados Unidos y sus aliados en la llamada coalición contra el régimen de Irak constituye, en cierto sentido, la puesta en escena del nuevo orden internacional perfilado tras el fin de la Guerra Fría. Así, cobran un sentido de nivel estratégico acontecimientos de suyo extraordinarios como la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética o el atentado contra las Torres Gemelas. Efectivamente, los principales sucesos internacionales han venido denunciando de hecho un cambio radical en la relación entre las naciones. El mundo imaginado en Yalta y sus instituciones consecuentes son cosas del pasado. Hemos entrado decididamente en un nuevo orden internacional, político y militarmente subordinado a los intereses y la voluntad de los Estados Unidos como potencia hegemónica de rango imperial. Y la

ONU y demás legalidad preexistente se han visto, y se verán cada vez más, sujetas a los dictados de ese nuevo orden. Seguramente las grandes potencias actuales, que entrarán sin remedio en esa lógica, retendrán importantes márgenes de negociación, que las colocarán en el elenco privilegiado de un segundo plano merceder de consulta, y acaso su enorme poder económico les permita encontrar en ese terreno ciertos espacios donde se conserven algunas reglas de juego parecidas a las del pasado. Pero no más. El mundo es inapelablemente otro. Los artículos de Guillermo Ortiz, Alejandro Bonvecchi y Martín Plásel más el testimonio documental de un diplomático norteamericano, ayudarán a reflexionar y a tratar de comprender los interiores y los alcances de la dramática coyuntura del ataque sobre Irak, en el marco de la gran mutación. OP

De la contención a la guerra preventiva

EEUU se asume como la única democracia imperial moderna

La crisis de Irak clausura una etapa en Medio Oriente al tiempo que constituye el primer escalón en la puesta en práctica de la teoría de la "guerra preventiva" tras la modificación de las premisas estratégicas de EEUU, en especial luego del megaatentado del 11 de septiembre. El enemigo hoy surge de la "amenaza difusa" de un terrorismo de nuevo cuño y su vinculación con Estados parias en posesión de armas de destrucción masiva. Cambio cualitativo y sustancial tras medio siglo de la doctrina de disuasión bipolar característica de la Guerra Fría. También abre una nueva era en el lazo transatlántico y el papel de la ONU.

Guillermo Ortiz

De algún modo, la nueva situación es un regreso de la geopolítica tras el convulsivo interregno geoeconómico de la última década, signado por la globalización. EEUU comprendió que el libre comercio no alcanza para garantizar su seguridad y decide proyectar su poder militar combinando el más frío realismo, "legitimado" por su tradi-

ción de superioridad moral, a falta de apoyo en la ONU. De lo que no da cuenta es de la cadena de desestabilizaciones que provocará su "dominio democrático".

"Sin Guerra Fría, qué sentido tiene ser norteamericano", afirmaba nostálgico un experimentado diplomático estadounidense poco tiempo después del hundimiento soviético.

La frase puede leerse en dos dimensiones: por un lado, como curiosa sín-

tesis del sentimiento de confusión de la élite de Washington en un largo período de transición internacional que ocupó algo más de la década del 90; por otro, como anticipo de las claves del futuro comportamiento de EEUU en términos de proyección exterior, teniendo en cuenta que, en tanto única superpotencia en pie tras el ocaso de la bipolaridad, asume la responsabilidad de diseñar un nuevo orden mundial aún en ciernes.

En este contexto, la cuestión iraquí, a partir de la decisión estadounidense de llevar adelante una intervención militar de carácter decisivo en términos unilaterales, debe observarse no sólo como un salto cualitativo en el ordenamiento de una de las regiones más explosivas del planeta, sino también como el punto de partida hacia la configuración de una nueva arquitectura transatlántica de la cual, no obstante, no tendremos noticias hasta bien entrado el siglo XXI.

Por el momento, está claro que el largo "juego" bélico-diplomático que puso en la mira al régimen de Saddam Hussein, sentando sobre una porción de territorio con las segundas reservas de petróleo conocidas, sólo superadas por las de Arabia Saudita, tiene un impacto en múltiples direcciones que, en principio, afectó la relación transatlántica y el equilibrio intrareo, y

vació de contenido el sistema de legitimidad suministrado por Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Irak quedará, lógicamente, como inoperante cierre de una etapa en el trazado de Medio Oriente y podrá observarse también como *leading case* o primer laboratorio de la nueva doctrina estratégica de los Estados Unidos, luego de más de una década de confusión geopolítica. Un experto militar estadounidense lo definió en pocas palabras: "Durante la Guerra Fría, EEUU se encargó sólo de 'contener' (la influencia soviética), pero hoy enfrenta una amenaza (neoterorismo, proliferación de armas de letalidad extrema) que es más difícil de contener, ya que no hay un Estado como soporte directo ni tampoco región o área definida explícitamente como teatro". Es lo que se denomina el "enemigo difuso". Pero vamos por partes.

Crear un nuevo orden es un arte refinado

Para comprender esta mudanza global, es preciso detenerse en la evolución del escenario internacional, en las características peculiares de la crisis iraquí, en especial desde la Primera Guerra del Golfo en 1991, y en los nuevos lineamientos diseñados por Washington en los últimos años puestos en práctica por el *staff* de la administración Bush, en especial a partir del fatídico 11 de septiembre de 2001. Porque así como no puede comprenderse el apoyo de EEUU y Europa a Saddam sin la revolución chita iraní de 1979 de la mano del *ayatollah* Ruhollah Khomeini, ni tampoco la operación Tormenta del Desierto de 1991, sin la inoportuna ocurrencia del líder iraquí de invadir Kuwait, exhausto y empobrecido tras una guerra de nueve años con Irán; del mismo

modo, no puede entenderse la urgencia de Washington por ir más allá de la Resolución 1441 votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU (pero que no incluía la automaticidad de un ataque a Irak), sin el megaataque contra el World Trade Center y el Pentágono del 11 de septiembre, asimilado como una verdadera derrota militar.

Evidentemente, crear un "nuevo orden" es un arte refinado. Exige poder, voluntad, pero también consenso y evaluación de sus consecuencias a largo plazo. EEUU siempre se mostró rápido para la guerra –en el caso del Golfo, para construir la más amplia coalición desde la Segunda Guerra y restituir la soberanía del emirato anexionado en 1991–, pero ineficaz para garantizar una posguerra estable. Así, Irak, esa "locura de Churchill", terminó constituyéndose en un "fardo", sometido a operaciones punitivas de alto costo y escaso rédito. El problema reconoce factores coyunturales y estructurales. Coyuntural, porque tras la guerra inacabada de Afganistán (para forzar la caída del régimen talibán que proporcionó un santuario a la red Al-Qaeda) y el fracaso de las fuerzas estadounidenses en capturar a Bin Laden, Saddam Hussein aparecía como un líder "paria", localizable, y en control de una franja de territorio precisa –si bien desde la guerra del Golfo escapaban a su mando las porciones de territorio norte (de población kurda) y sur (chittas) establecidas como zonas de exclusión por estadounidenses y británicos. Estructural, porque ubicado en el delta de la antigua mesopotamia, cuna de civilizaciones, entre los famosos Eufrates y Tigris, que descienden desde el Norte para desembocar unidos en el estuario dulce del Chatt-al Arab –eje de la disputa con Irán–, el país aparece como una encrucijada central. Lo que eran las tres más importantes provincias militares del "frente oriental" del imperio turco –Mosul, Bagdad y Basora–, sigue constituyendo un área geopolítica excepcional tanto como cierre y defensa en la salida al Índico como por sus reservas energéticas.

Como si esto fuera poco, Irak era un tema abierto tras la guerra de 1991. Luego de la restitución de la soberanía kuwaití, no hubo tratado de paz sino, simplemente, un cese del fuego sujeto al cumplimiento de parte de Bagdad, de una serie de condiciones vinculadas a su desarme, si bien está claro que las resoluciones de la época no explicitaban el recurso a la fuerza (reapertura de hostilidades automáticas) en caso de incumplimiento. De ahí que Washington forzó la aprobación en noviembre pasado de una nueva Resolución –la 1441– que instaba al régimen iraquí a abrir sin condiciones su territorio a una nueva ronda de inspecciones en busca de armas de destrucción masiva, en sus variantes nuclear, química o bacteriológica, medida que el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad.

Precisamente, la decisión del "tridente progretera" (EEUU-Reino Unido-España) de no presentar una segunda resolución (tras la publicidad cumbre de las Azores de mediados de marzo pasado, un devaluado Yalta del nuevo siglo) para evitar el "fraseo" de un veto ruso y francés en el Consejo de Seguridad, obligó a EEUU a elaborar una reinterpretación de la Resolución 1441 en pos de justificar el ataque –si bien esta medida advirtió sólo sobre "graves consecuencias" (sin precisarlas), y la carta de la ONU es clara en cuanto a que, para iniciar hostilidades "recurso al uso de la fuerza") es necesaria una resolución adicional.

Tres lógicas parecen haber confluido en el conflicto, además de lo apuntado. Una lógica energética, si bien el petróleo es una fuente declinante aunque insustituible en el próximo medio siglo; una lógica política: crear un nuevo orden; y una lógica económica, vinculada también a los excesivos costos que surgían de mantener la "camisa de fuerza" de Saddam. Desde hace un tiempo, estrategias norteamericanas comenzaron a evaluar el prolongado mandato de Saddam más como un peligro para la estabilidad regional que como factor moderador de la influencia chita (Irán) en la zona y garantía de la integridad territorial

de Irak (un país tendiente a la fragmentación). Incluso, lo que algunos veían como una evolución favorable del liderazgo moderado de Teherán, hizo que la presencia de Saddam en el poder como factor de equilibrio regional (hecho que provocó que las fuerzas de la coalición no marcharan hacia Bagdad en la anterior conflagración) se revelase ya como innecesaria.

En pocas palabras: el costo de una estrategia de "contención continuada" de Irak, mientras Saddam se mantuviera en el poder era insostenible en el tiempo y bien valía afrontar un ejercicio bélico, unido al megaproyecto de reconstruir el país favoreciendo, de paso, a empresas estadounidenses, incluida entre los consorcios convocados una subsidiaria de la *Halliburton Company*, en la que trabajó el vicepresidente Dick Cheney.

Guerra, factor militar y opinión pública

El caso iraquí también disparó el debate sobre la guerra, tema complejo que ocupó las primeras planas de los diarios teniendo en cuenta la magnitud de las manifestaciones en todo el mundo.

Es evidente que toda guerra implica una catástrofe humanitaria, si bien es un recurso (siempre aconsejable que lo sea en el "último caso") derivado de la utilización del instrumento militar, atributo del Estado, sede del monopolio de la fuerza, al servicio de objetivos políticos. De algún modo, se inscribe en la arquitectura de toda política exterior entendida como instrumento de optimización del interés nacional. Ocurre que toda guerra tiene un sentido, esto es, está subordinada a un objetivo político, que puede ser banal o excelso; y también tiene un lenguaje. El problema es que el lenguaje siempre es procaz. Además, está visto que en esta nueva fase internacional, inaugurada a comienzos de los 90, en la que brilla con luz propia lo que se ha denominado el neointervencionismo (operaciones de injerencia humanitaria, mantenimiento de la paz, etcétera), toda acción internacional –sea ésta

ayuda humanitaria, interposición entre facciones beligerantes, preservación del alto el fuego, soporte de acciones diplomáticas tendientes a hacer cumplir sanciones de guerra a "Estados parias", como el caso iraquí–, exige un componente militar y, por consiguiente, la amenaza de una acción de carácter coercitivo. En estos casos, no hay acción diplomática eficaz sin el elemento disuasorio que surge de la amenaza de algún tipo de poderío militar (preferentemente el estadounidense) y de la disposición explícita para ser utilizado. Incluso, según las distintas doctrinas estratégicas que circulan en Washington, cuando se decide utilizarlo debe ser de carácter abrumador. La noción no es nueva. "No hay sustituto a la victoria. Una vez que se nos obliga a la guerra, no hay otra alternativa que aplicar todos los medios para terminarla rápidamente y derrotar al enemigo fuera de duda. El objetivo mismo de la guerra es la victoria". No son palabras de George W. Bush sino del general Douglas MacArthur que, seguramente, habrá sobrepasado las cabezas de los funcionarios de seguridad estadounidenses en torno de la crisis iraquí e inspirado los informes de la inquietante consejera de Seguridad, Condoleezza Rice.

En cuanto a la opinión pública, la ola de manifestaciones habla por sí sola y no es de hoy la importancia que adquiere en los EEUU, incluso en ciertas decisiones de política exterior. Contribuye a esta la revolución tecnológica en el área de las comunicaciones (la famosa aldea global, Internet, etcétera): instrumentos que permiten contacto e información en tiempo real. De hecho, EEUU intervino en la década del 90 en Somalia a partir de las imágenes de hambre generalizada que llegaban a los hogares de la clase media blanca suburbana y bienpensante. Pero también debió retirarse con un fracaso general, luego de que esos mismos televisores mostraran imágenes de los cuerpos de los efectivos norteamericanos arrastrados por facciones tribales por las calles de Mogadiscio. Hoy la guerra en EEUU

LA CIUDAD CREA Y PRODUCE

www.buenosaires.gov.ar

empleo

reactivación
para las pymesCréditos y subsidios
por 25 millones para estimular
el desarrollo de las empresas.SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

gobBsAs

goza del apoyo mayoritario de la opinión pública. Apoyo que se resentirá ante un número desproporcionado de bajas propias. En una palabra: está claro que Washington hace oídos sordos a la opinión pública mundial, pero no a la propia.

Escenarios en evolución y doctrinas de EEUU

No es una novedad que a lo largo de los siglos siempre hubo una Nación que pretendió modelar el escenario mundial sea por vocación imperial, voluntad o inspiración política. Sin ir muy lejos, desde el siglo XVII, la Francia del cardenal Richelieu suministró la primera apoyatura moderna a las relaciones internacionales a través del concepto de la Nación/Estado sobre la base de la idea del "interés nacional". Un siglo después fue Gran Bretaña que, al introducir el concepto de "equilibrio de poder", signó la diplomacia europea por casi doscientos años. Ya en el siglo XIX, se le debe a la Austria de Metternich la reconstrucción del concierto europeo (Congreso de Viena, 1815), destruido luego por la Alemania de Bismarck. En el siglo XX, y con las correspondientes oscilaciones derivadas de su condición de "país nuevo" (una "tierra de pioneros" escindida de la problemática Europa), ninguna Nación influyó tanto en el escenario mundial como Estados Unidos; asimismo, un país desgarrado entre un pasado de luchas y el anhelo de un futuro perfecto que, por lo tanto, terminó por autopercibirse como "faro" y "cruzado" sobre la base de dos enfoques ambivalentes: uno, aislacionista (el "espléndido aislamiento" de ascendencia británica), y otro, misionero (del que proviene la noción de "destino manifiesto" y demás). Ahora bien, desde el comienzo de la Guerra Fría (incluso antes de poner fin a la Segunda Guerra Mundial), EEUU desarrolló una teoría de índole geopolítica y carácter defensivo, basada en la contención (del comunismo) en pos de resguardar las respectivas esferas de influencia, en la doctrina de

la disuasión y, en el plano nuclear, en lo que se denominó la Destrucción Mutua Asegurada. Ambos contendientes se comprometían a mantener un determinado umbral de vulnerabilidad y capacidad de respuesta para evitar el "primer golpe". Desaparecida la bipolaridad con la precipitada autodisolución soviética, Washington estableció un concepto de tono geoeconómico basado en la "ampliación" (de mercados), con la idea de que, desaparecido el principal enemigo, la difusión de la economía de mercado y la democracia se darían de forma casi espontánea garantizando la estabilidad mundial. Para ello, el fenómeno de la globalización sería la panacea y teorías audaces como el "fin de la historia" y el "ocaso de las ideologías" tuvieron ecos desproporcionados. La multiplicación de conflictos de índole étnico secesionista en el corazón europeo (desfile de guerras yugoslavas), el colapso de los Estados poscoloniales del África negra, la crisis de las experiencias nacionalistas árabes en los países del Magreb y otros fenómenos, demostraron el error del planteo con el que se intentó lidiar con el convulsivo mundo de la alta y baja posguerra fría. Finalmente, en especial desde el acceso de la administración Bush y

más aun desde el megaentendado del 11 de septiembre, EEUU vuelve a una tesis geopolítica como respuesta a un mundo mucho más complejo, inseguro, de amenazas de nuevo tipo, entre las que destacan el fenómeno neorrorista, ya no como una amenaza proveniente de un solo centro de poder, y la proliferación de armas de destrucción masiva, en sus variantes nuclear, bacteriológica o química. En este contexto, EEUU produce un cambio sustancial: abandona el componente de "disuasión" característico de los últimos cincuenta años por el de "represalia", cuya expresión práctica está dada por la "guerra preventiva". Es lo que vemos en Irak. La guerra preventiva es un concepto ciertamente problemático, ya que alude a una amenaza instalada en el futuro y por lo tanto incomprobable. Es decir: se actúa hoy porque no hacerlo acarrearía mayor riesgo o peligro. Si bien esta idea fue prefigurada por estrategas como Paul Wolfowitz (segundo de Donald Rumsfeld a cargo del Pentágono) ya en 1992, es evidente que toma ímpetu luego de la masacre de septiembre, a través de la cual EEUU (que concebía la guerra como un "asunto de europeos" o bien una desgracia desarrollada en parajes remotos) adquiere conciencia de su especial vulnerabilidad.

Washington entiende que no puede admitir una nueva bipolaridad y su obsesión hoy no es el comunismo sino aquellos Estados imprevisibles o "parias" (*Rogue States*) en posesión de armas de destrucción masiva. El verdadero temor de EEUU es la difusión de tecnología sensible en manos de Estados o grupos no previsibles y su voluntad política es que, si la ONU no neutraliza este problema, EEUU es el único con capacidad de hacerlo.

La idea del "eje del mal", si bien suena risueña (¿se estima que habría entonces un "eje del bien" en el que cabe anotarse?), sintetiza esta preocupación. Esto es, la derivada de la vinculación entre Estados potencialmente hostiles en posesión de arsenales sensibles y grupos de terroristas organizados en redes diseminadas por más

de 160 países, sin un Estado "sponsor" ni teatro de operaciones circunscripto y con capacidad financiera para adquirirlos.

De ahí que EEUU decide retomar su liderazgo sobre la base de un "inter-nacionalismo coercitivo", con o sin aliados. Y ejercer una hegemonía sustentada en el realismo, ejercido a través de la proyección de su poderío militar, legitimado por su concepto de superioridad moral, una vez que se ha vuelto ineficaz (a los ojos de Washington) el sistema "onusista" de regulación de conflictos tan costosa como construido a lo largo del siglo. Se trata de una confluencia de ideas. Un poco el "stimsonianismo" (por el ex secretario de Estado, Stimson, 1931), para quien un mundo ordenado requiere una sola estructura durable de seguridad mundial "que debe ser protegida en todas partes"; algo de Woodrow Wilson (1917-1920): "EEUU tiene la misión de salvar al mundo" y hacer honor a una "tradicción honorable" de la que formó parte, por ejemplo, el Plan Marshall; de Dean Rusk, ex subsecretario de Estado para Asuntos de Lejano Oriente durante la guerra de Corea, quien hablaba en términos de "imperativos morales" con "obligaciones abiertas"; y del propio Franklin D. Roosevelt, quien abandonó definitivamente la corriente aislacionista tras el episodio de Pearl Harbour al considerar un "espejismo" que EEUU pudiera existir como "islaote de paz" en un mundo desordenado y hostil.

Conclusión que no tranquiliza

La teoría del realismo se apoya en que el criterio rector de las relaciones exteriores de un Estado son sus propios intereses, debidamente jerarquizados a partir de su interés vital. Cancelada la Guerra Fría, la estructura de poder está dominada por la hegemonía de EEUU mediante la universalización de su destino manifiesto, que ha dinamitado el sistema de seguridad colectiva hasta ahora vigente. Bush dio alcance planetario a esta noción con la polémica ocurrencia del "dominio democrático"

(más polémica aun si se refiere al Medio Oriente) iniciada en Irak, lo que prefigura una actitud imperial al tratarse de una conquista directa de territorio y el ocaso del modelo de Estados delegados. Estrictamente, lo que sucede es que EEUU ha virado: pasó de ser una superpotencia defensora del *status quo* a constituirse en un hiperpoder dispuesto a modificar el escenario internacional. Razón por la que pasa de la influencia a la hegemonía activa: intenta diseñar un orden dinamitando lo que queda del anterior.

Así, no sería de extrañar que, tras

Irak, siguieran Irán, Colombia, Corea del Norte. Lo inquietante es que si sería extraño esperar que algunos de estos países aguarden en forma pasiva a que les llegue el turno. Se armarán (por lo que EEUU estaría paradójicamente estimulando la proliferación) y, en especial en el caso norcoreano, es posible que decidan atacar primero, adoptando, en un sarcástico giro del destino, la doctrina de guerra preventiva pulcramente diseñada en los salones del Washington más secreto.

Decíamos que diseñar un "nuevo orden" es un arte refinado. □

Sólo una dimensión política puede ser efectiva

Por una oposición a lo evitable

El debate sobre la guerra en Irak parece tallado a la medida de los argumentos que los gobiernos que la promueven exponen por todos los medios a su alcance. A la inverosimilitud y a las banales hipérbolos esgrimidas por las administraciones de Bush y de Blair, los líderes, intelectuales y manifestantes que objetan la guerra oponen, además de evidentes motivos humanitarios, argumentos orientados a deslegitimar la decisión bélica de esos gobiernos antes que a comprenderla y a ponderar, sobre la base de esa comprensión, sus efectos.

Alejandro Bonvecchi

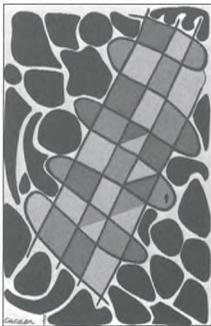
Si en lugar de coincidir en la condena a la guerra por razones humanitarias, cabe sin embargo examinar críticamente estos argumentos en pugna, de modo de buscar en esa exploración fundamentos para una oposición políticamente consistente a este conflicto.

Los argumentos

Los gobiernos de Bush y de Blair han justificado la intervención militar en Irak sobre la base de tres argumentos: que Hussein es un dictador que comete crímenes de lesa humanidad contra su pueblo; que Hussein posee armas de destrucción masiva y está dispuesto a usarlas, y que el régimen

de Hussein está ligado al terrorismo fundamentalista. El primer argumento parece difícil de refutar en vista de lo ocurrido a los kurdos; el segundo argumento se apoya en discutibles evidencias empíricas y más discutibles evaluaciones estratégicas, y el tercero parece inconsistente con el prolijo discurso de Hussein y su séquito. Los opositores a la guerra, por su parte, acusan a Bush y a Blair de desviar, con esos argumentos, la atención pública de los "verdaderos problemas"; pero curiosamente proceden de manera idéntica al exponer los suyos.

Un cierto tipo de oposición "de izquierda" que incluye desde los movimientos antiglobalización hasta una difusa coalición de intelectuales, artistas y ciudadanos con convicciones antiimperialistas, acusa a los gobier-



Negro alrededor de colores (1971)

nos de "derramar sangre por petróleo", de promover la invasión imperialista de Irak para expandir los negocios de las compañías petroleras de sus países y de ligar esa intervención militar con la lucha antiterrorista para restringir las libertades civiles en Occidente. La guerra es, pues, para ellos, ilegítima por sus motivaciones económicas y totalitarias, y sus justificaciones serían ardidés destinados a ocultar aquellos intereses.

La oposición que cabe llamar "liberal", nucleada eminentemente en torno de dirigentes demócratas norteamericanos y laboristas británicos, objeto la guerra por sus endebles justificaciones estratégicas y por su desproljo trámite diplomático. La guerra es estratégicamente equivocada porque aunque Hussein hubiera tendido mermas de destrucción masiva, la vigilancia de la ONU y la amenaza de intervención militar lo habrían disuadido de utilizarlas. Y porque las gestiones di-

plomáticas encaminadas a obtener apoyo para la guerra habrían dañado ya demasiado a las organizaciones multilaterales como para insistir con éxito en la unilateralidad. En esta perspectiva, las justificaciones de Bush y Blair encubrirían sus déficit de análisis estratégico y su incapacidad para lidiar con problemas de real entidad militar como los de Norcorea, y la guerra sería innecesaria y dañina para el derecho y la seguridad internacionales.

Estructurado de este modo, el debate sobre la guerra resulta casi inexistente. Cierta oposición de izquierda lo elude resolviendo el conflicto con la impugnación del interés económico y de la tentación totalitaria; y la oposición liberal lo escamotea al remitirlo a las incapacidades de los gobiernos. Así, pues, la guerra ya no es la decisión política de líderes políticos que operan en instituciones políticas —democráticas, por otra parte—, sino el

ilegítimo producto del capricho, la ambición o el error. En estas condiciones, el debate se reduce a la condena desinteresada o a la objeción técnica. Pero por pertinentes que ambas puedan ser, no suplen la falta de una discusión específicamente política. Esta discusión puede añadir al repudio que los opositores a la guerra sostenemos, herramientas para comprender las decisiones causantes de la muerte, la destrucción y el dolor que rechazamos, y para eventualmente imaginar modos políticamente efectivos de articular nuestra oposición.

La política de la guerra

La discusión política acerca de la guerra podría comenzar por el examen de los factores que posiblemente condujeron a los gobiernos a impulsarla. En el caso de Bush, dos aparecen como salientes: la evolución económica y las dificultades de la lucha antiterrorista. La economía norteamericana parece encontrarse en una meseta de actividad que los planes de recorte impositivo del gobierno no contribuyen a revertir; el desempleo y la desconfianza de los consumidores son crecientes, y la predisposición de los votantes a reelegir al presidente disminuye con la profundización de estos problemas. La lucha global contra el terrorismo iniciada luego del 11 de septiembre de 2001 plantea, por su naturaleza, dificultades para el uso político-electoral, ya que nunca es posible establecer cuándo se ha eliminado a organizaciones terroristas por definición clandestinas y, según parece, bien extendidas y financiadas. Sin grandes resultados que mostrar en economía y sin seguridades de éxito en la lucha antiterrorista, resulta plausible pensar que un Bush temeroso de perder su reelección haya pensado en un ataque corto y exitoso contra Irak como un modo de exhibir laureles en el frente externo y simultáneamente estimular aquellos sectores productivos por la vía de un mayor gasto público en defensa.

En el caso de Blair, las dificultades internas se articulan con la falta de rol

de Gran Bretaña en el orden internacional. El Nuevo Laborismo ha terminado su luna de miel con la sociedad y la prensa británica y, pese a que la oposición dista de recobrar sus chances electorales, el Gobierno carece de fuerza política suficiente para imponer reformas que incrementen la eficiencia del sector público, donde los sindicatos se muestran dispuestos a resistir, y que mejoren el desempeño de los servicios privatizados, donde las empresas escapan a la regulación y difieren, en algunos casos, las inversiones de mínimo mantenimiento. Gran Bretaña prácticamente carece de lugar político en el mundo. Pese a su militante anticomunismo, no compartió con los Estados Unidos las palmas por el triunfo en la Guerra Fría, y se incorporó tarde, parcialmente y a los tumbos, en una Unión Europea impulsada por sus históricos rivales continentales, Francia y Alemania. Frente a las opciones de integrar sin liderazgo una federación de países que implica ciertas transferencias sectoriales desfavorables —para actividades primarias y también industriales— u operar como el promotor europeo de la política exterior del gran gendarme, el Reino Unido eligió, fiel a su estilo, tratar de combinar lo mejor de ambos mundos: tallar en la constitucionalización de la Unión Europea y, simultáneamente, forzar a los norteamericanos a moderar su unilateralismo y a buscar apoyo de la ONU para atacar Irak.

La naturalización de las apuestas de ambos líderes ha elevado hasta lo prohibitivo los costos del retroceso. Para Bush, retroceder implicaría renunciar a los potenciales réditos políticos y económicos de la guerra y debilitar sus chances de reelección; para Blair significaría abdicar frente a la presión franco-alemana y servir su cabeza en bandeja al voto de desconfianza de sus adversarios internos. En cambio, una guerra breve, exitosa y con pocas bajas civiles y militares fortalecería las posibilidades electorales de Bush, renovaríala las credenciales de Blair frente a Europa y a su partido, y otorgaría a ambos líderes poder para rediseñar el mapa político de Medio Oriente.

Sin embargo, ninguno de los escenarios preferidos por Bush y Blair —ni el optimista ya referido ni el mediano pesimista de un conflicto más extenso y sangriento— elimina los peligros que los líderes se proponen neutralizar, y en cambio crean nuevos riesgos cuya desactivación aparece como incierta. El escenario optimista quizás estimule la actividad de ciertas industrias pesadas norteamericanas y británicas e incremente la rentabilidad de las compañías petroleras y —al menos en teoría— los ingresos de los Estados capaces de cobrarles impuestos. Pero ello no eliminaría el riesgo de que la baja actividad persistiera en otras ramas. Y generaría posibilidades de mayor inflación por el aumento de los costos de producción debido a alzas en el precio del petróleo, por la profundización del déficit fiscal y comercial a causa del mayor gasto militar y del ingreso de mercaderías de zonas con menores costos laborales y financieros, y por la generalización de la recesión surgida de la necesidad de subir las tasas de interés para combatir la aceleración de precios derivada tanto del alza del petróleo como del aumento de la cantidad de dinero para financiar las brechas fiscales y comerciales. Por otra parte, estos riesgos económicos particularmente agudos

para ciertos países centrales, no necesariamente repercutirían de manera favorable en áreas periféricas, ya que aunque la competitividad de sus exportaciones mejorara, el incremento de las tasas de interés internacionales reorientaría los flujos de capital hacia las economías centrales y debilitaría la ya frágil sustentabilidad de los mercados de crédito doméstico y de las capacidades de pago de la deuda externa pública y privada.

Los riesgos políticos no serían menos relevantes. La victoria anglo-norteamericana probablemente permitiría rearmar el rompecabezas de Oriente Medio y consolidar un polo de poder militar y económico en torno del cual los Estados pequeños pudieran alinearse en busca de ventajas particulares. Pero ni la victoria sería definitiva, ni los modos de su ocurrencia inocuos, ni la consolidación de ese poder —por otra parte ya existente— suficiente como para neutralizar la competencia de otros. La transitoriedad de la victoria no derivaría únicamente de la solidaridad árabe frente a la agresión occidental, sino también de la probablemente poco consensuada distribución de costos de una nueva configuración de poder en el Golfo Pérsico y en Palestina. Frente a la legítima vigiliencia de tales posibles salidas y a las pérdidas humanas y económicas que la guerra seguramente infligiría, el recurso al terrorismo como represalia parece insinuarse como número puesto. Y frente al daño causado al derecho y las instituciones internacionales, y a la concentración de poder económico derivada de la ocupación de Irak, la competencia entre el polo anglo-norteamericano y los países líderes de Europa por la influencia sobre el comercio con otras naciones y regiones no haría sino intensificarse. Como la dolorosa experiencia argentina en la embajada de Israel y en la AMIA lo demuestra, la periferia no estaría exenta de los riesgos que correrían los países centrales, con el agravante de que la fluidez del escenario político mundial incrementaría la incertidumbre a la hora de decidir



Libros del Zorzal



Yvonne Bordelois *La palabra amenazada*

"El lenguaje es un amenazante peligro para la civilización mercantilista, por su estructura única e indestructible, que ningún mercado puede poner en jaque."

La autora sostiene que el rescate de la palabra no es ya un problema de crítica filológica o de talento literario, sino el requerimiento de una nueva conciencia ecológica, una alerta contra el embate de las fuerzas que impiden nuestro contacto con ese lenguaje del que surgen la crítica, el júbilo, la creatividad y el contacto más profundo con los otros y con nosotros mismos.

Libros del Zorzal: Tucumán 3350 piso 1°N / 4864-4150
/ info@delzorzal.com.ar



La tela

(1972)

los lugares, las formas y la medida de la asociación con los competidores del proscenio.

Resultaría tan ingenuo presuponer que los promotores de la guerra ignoran estos riesgos como que, tal cual lo sugieren ciertos opositores liberales y de izquierda, los minimizan por perfidia o ineptitud. El problema con oponerse a la guerra esgrimando los riesgos que ella puede cristalizar o generar es que esos riesgos son, para los líderes guerreros, más difusos que los costos de la paz. Los atentados terroristas, las guerras de baja intensidad, la estancación y las crisis financieras que pudieran sobrevenir constituirían, en todo caso, eventualidades susceptibles de ser enfrentadas ya con una fortalecida épica militarista, ya con renovadas políticas económicas que con la victoria estos líderes tendrían más tiempo y margen político para formular. La paz, en cambio, implicaría la continuidad de una incertidumbre económica que podrá empujar al mundo a una recesión a causa de la postergación de inversiones y consumos, del debilitamiento político y hasta de la imposibilidad de supervivencia de estos líderes. La demostración para quienes medran con el terror, de que los poderosos de la Tierra no eran sólo incapaces de impedir el terrorismo en sus propios territorios, sino también de imponer su línea militar a otros más débiles. Así, pues, la política ha convertido a la guerra en inevitable, y oponerse a la realización de lo inevitable deviene, entonces, un ejercicio de futilidad.

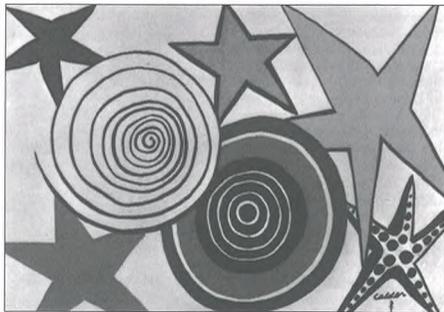
Oponerse a lo inevitable

Pero que la guerra haya sido inevitable no implica que sus consecuencias también lo sean. El mundo parece encaminado a combinar lo peor de las últimas tres décadas: los *shocks* petroleros y la estancación de los 70; los desórdenes fiscales y financieros y la anarquía rentística de las corporaciones de los 80; la volatilidad financiera y el terrorismo fundamentalista y la anomia política de los

movimientos sociales de los 90. Sin embargo, ni los ingredientes ni las formas de esta combinación son inevitables: dependen, más bien, de las decisiones de los gobiernos y de las ideas e incentivos políticos —y por cierto económicos— que diversas fuerzas, desde partidos y movimientos sociales hasta sindicatos, empresas e intelectuales, puedan crear y movilizar para influir en esas decisiones. La oposición política a la guerra podría definirse, entonces, como la oposición a la generación y al manejo de las consecuencias de la guerra; como la oposición, en otras palabras, a lo evitable de la guerra: la matanza de civiles, la ocupación feroz e incontrolada de Irak por parte de los ejércitos victoriosos, la arbitrariedad en el rediseño político de Oriente Medio, la deserción internacional de la reconstrucción de Irak, la restricción de las libertades civiles en la lucha contra el terrorismo, la desarticulación de los mecanismos de cooperación económica internacional, la persistente resistencia de organismos multilaterales y gobiernos de todo tamaño a redefinir la arquitectura financiera global, la reaparición de presiones corporativas tanto civiles como militares sobre los gobiernos democráticos, y sigue la lista. Así, el repudio a la guerra, la muerte, la destruc-

ción y el dolor humanos que la política ha tornado inevitables podría contarse en la oposición a algunos aún evitables efectos de tales horrores.

Esta oposición a lo evitable bien podría ser moral y técnica a la vez que política, pero sólo como oposición política podrá aspirar a ser efectiva. Tal es, al cabo, una de las enseñanzas posibles de la trayectoria de Francia, Alemania y Rusia desde la guerra del Golfo hasta la actual coyuntura. Los tres países apoyaron en su momento el ataque contra Irak, pese a contar entre sus habitantes con numerosas minorías de origen musulmán y a arriesgarse con aquella participación a ser blanco de futuros atentados terroristas. Que esta vez se opongan a la guerra no tiene que ver con la emigración masiva de ciudadanos musulmanes ni con la disminución del riesgo terrorista, sino con los incentivos y las restricciones que la integración económica, las disputas comerciales intercontinentales, la dinámica de sus coaliciones de gobierno y la presión de la opinión pública y los medios de comunicación han colocado ante sus líderes. Dependrá, pues, de la oposición política a la generación y al manejo de las consecuencias de la guerra el intentar impedir que lo evitable se transforme en su contrario. □



Espirales y estrellas

(1969)

Radicalización ideológica del Partido Republicano

Nuevo régimen político

El autor propone interpretar el conflicto político inaugurado por la doctrina de la guerra preventiva puesta en marcha por los Estados Unidos, y su aplicación al caso de Irak, como una acción revolucionaria de un Partido Republicano que, luego de imponer su lógica política e ideológica en la administración doméstica, ha logrado convertirse en un actor político internacional. Muchas veces se ha hecho referencia a un necesario "cambio de régimen" en Irak como forma de justificar el ataque y la ocupación de ese país. El artículo sugiere que, en realidad, el régimen en peligro es otro.

Martín Plot

Lo que se puso en juego en el debate sobre Irak no es la cuestión de la guerra o la paz. Tampoco la distinción entre guerra justa y la injusta. Y mucho menos —aunque a las posiciones más pacifistas o humanitarias todavía les cuesta entenderlo— el enorme sufrimiento humano que toda guerra inevitablemente genera. Lo que está en juego en el debate sobre Irak es la cuestión del régimen político. Pero ¿cuál régimen político? ¿El iraquí, como sostienen los que proponen la guerra contra Irak como una forma de "liberar" a millones de árabes y así generar un efecto democratizador en la región? ¿O el estadounidense, como advierten algunos ciudadanos norteamericanos que interpretan la guerra como la puesta en marcha de una doctrina de guerra ofensiva que cambiará, quizás irreversiblemente, la naturaleza de su propia república?

Sería interesante poder considerar ambas posibilidades, que sin duda están estrechamente vinculadas con el problema que me propongo tratar ahora. Pero el régimen político al que me refiero es otro y fue el que se puso inmediatamente en juego cuando la administración Bush hizo pública su decisión de inaugurar con Irak la doctrina de los ataques preventivos. El régimen político al que me refiero

estaba siendo transformado desde antes de que la guerra en Irak se materializara e incluso con anterioridad a los ataques del 11 de septiembre, que hoy se intentan infructuosamente utilizar como excusa. El régimen político al que me refiero es aquel cuyo posible desmantelamiento ha movilizó a millones de personas en casi todas las ciudades del mundo y ha forzado a ciudadanos de los países más remotos a seguir de cerca los debates del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El régimen político que está en juego, en fin, es uno incipiente, poco desarrollado y que carece de una fuerza de seguridad propia, pero que ya demandaba —y demandó más que nunca durante los debates sobre la guerra en Irak— el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima en un territorio de su jurisdicción. El régimen político que está en juego es el orden político internacional que fue desarrollándose durante los más de cuarenta años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y que había entrado en una nueva dinámica en los diez años que nos separan del fin de la Guerra Fría, dinámica que el Partido Republicano de los Estados Unidos no está dispuesto a aceptar.

Es régimen dual distinto peso político a distintos ciudadanos del mundo, es cierto; pero también establecía algunos criterios mínimos de recipro-

cidad. Este régimen político que es ineludiblemente dinámico —como todo régimen político, vale aclarar— parecía estar dando a los ciudadanos del mundo la sensación de vivir un proceso de construcción política con cierta legitimidad propia que no tenía por qué desembocar en la aceptación meramente fáctica del poder de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Ese régimen político daba a cinco de sus Estados miembro más poder que a los otros, también es cierto, pero a la vez multiplicaba sus prácticas e instituciones de tal modo que muchas de ellas —como por ejemplo la flamante Corte Internacional Criminal que se encargará de juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e, irónicamente, el delito de guerra ofensiva— no parecían llegar a reducirse a mera fachada de poderes de facto.

Pero lamentablemente, parecería ser que estamos ante una revolución —o, mejor dicho, un golpe de Estado— que se propone abortar ese proceso. Los que normalmente analizan las relaciones internacionales desde lo que creen es un punto de vista enteramente realista, suelen desarrollar una visión exclusivamente sincrónica de la vida política contemporánea. Para ellos, hablar de régimen político internacional es simplemente inaceptable, porque saben desde Hobbes que de no haber un Leviatán común, es imposible hablar de un régimen político común. Pero este tipo de realismo, que en realidad es empirismo, olvida toda diacronía cuando analiza el presente, a la vez que ignora toda sincronía cuando se trata de analizar el pasado. Esta perspectiva suele ignorar la contingencia de un pasado que fue presente, cuando narra con la seguridad de quien describe lo inevitable, los procesos de constitución de los Estados-nación, cuya aparición creó el escenario internacional que hoy nos resulta tan familiar. A la inversa, esta perspectiva suele ser incapaz de percibir la dimensión dinámica de un presente que se parece más a un conflicto sobre la forma que asumirá el orden político mundial que

a una repetición de escenarios pasados que habría que emular con resignación.

Mientras escribo estas líneas, los jejes de Estado de España, Gran Bretaña y Estados Unidos, reunidos en una isla en el medio del Atlántico, han decidido dar a las Naciones Unidas veinticuatro horas de plazo para "demostrar" la relevancia de la organización. El Consejo de Seguridad podría alterar el destino de lo que hoy parece una discontinuidad institucional inevitable, si aceptara la interpretación que de sus sucesivas resoluciones exigen estos tres Gobiernos y "autorizará" una guerra cuya puesta en marcha no está en discusión. Pero en realidad, el régimen político se encuentra amenazado de tal manera que ninguna de las alternativas posibles parecería estar en condiciones de salvarlo. Un cambio de último momento en la voluntad de los otros Estados no salvarán al régimen sino que, ahora sí, lo reducirá sin ambigüedades a un destino de mera fachada de los poderes fácticos. Mientras que un rechazo de la postura de estos tres Estados pondría al régimen polí-

tico ante la innegable realidad de su fracaso: "las milicias" de uno de sus Estados, mucho más poderosas que las de todos los demás Estados miembros, habrían finalmente ignorado sus órdenes y confirmado su irrelevancia.

El régimen político que sucederá al actual ya tiene su Constitución. Los "padres fundadores" se llaman Paul Wolfowitz y Richard Cheney, entre otros. El primer borrador de la futura Constitución, generado en 1992, un año después de la Guerra del Golfo y de la caída de la Unión Soviética, fue presentado a George Bush padre, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, y rechazado por éste de manera terminante—el documento no era conservador, como el Presidente, sino revolucionario. Ese documento es hoy el diseño institucional para el nuevo orden político mundial y se convirtió en "La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América", manifiesto oficial de la política exterior del gobierno de George Bush hijo. Entre 1992 y 2000, el proyecto tuvo que esperar, dado que "el sueño de dominación mun-

dial—como dice Norman Mailer—no fue recogido por la administración Clinton. [lo cual] podría ayudar a dar sentido al intenso e incluso virulento odio que tantos en la derecha sintieron durante esos ocho años. Si no fuera por Clinton, [pensaban.] los Estados Unidos estarían gobernando el mundo".¹

Pero un revolucionario no se limita a esperar sentado el advenimiento de un futuro que de todas formas considera inevitable. Un revolucionario actúa y no repara en instituciones, y mucho menos si se trata de instituciones como las democráticas, que precisamente suponen prácticas y principios que son los que su revolución se propone desplazar. Los medios por los cuales los revolucionarios del Partido Republicano intentaron recuperar el poder político durante esos ocho años fueron tanto electorales—el llamado Contrato con América de 1994—como "institucionales"—el juicio político a Bill Clinton de 1998/9. Pero ninguno de estos medios había logrado el resultado esperado cuando los revolucionarios se toparon con la crisis electoral de Florida durante las elecciones presidenciales de 2000. Fue allí donde la radicalización ideológica del Partido Republicano forzó la primera discontinuidad institucional de lo que hoy ya es una serie, e instaló en la presidencia a un George W. Bush sin legitimidad democrática de origen.

Hoy, el Partido Republicano se ha convertido en un actor político internacional y se dispone a forzar las incipientes instituciones mundiales de manera análoga. El régimen que se propone instalar no es, por supuesto, una réplica de aquel que los constitucionalistas de 1787 diseñaron para la confederación de 13 estados nacida en 1776 que, por razones semejantes a las de hoy—básicamente, la incapacidad de hacer valer su monopolio de la fuerza legítima—debió ser reemplazada por una república federal. Los principios que articulan la nueva Constitución son básicamente dos y radicalmente distintos de aquellos: la doctrina de la guerra preven-

tiva y la manifestación de un poder abrumador. La doctrina de la guerra preventiva sostiene un principio básicamente hobbesiano: en el estado de naturaleza internacional, cada Leviatán es soberano en su capacidad de decidir cuándo su seguridad se encuentra amenazada. La manifestación de un poder abrumador, en cambio, parece ignorar el principio hobbesiano básico que dice que no importa cuán grande y poderoso seas: en el estado de naturaleza la muerte violenta en manos de un número indeterminado de los "débiles" es siempre una posibilidad que nos iguala a todos. La manifestación de este poder abrumador hoy necesita a Irak, precisamente para manifestarse—el poder es, inevitablemente, performativo. La idea de la doctrina es entonces garantizar, desde hoy en adelante, que ningún Estado o grupo de Estados sobre la tierra pueda jamás amenazar la superioridad militar de los Estados Unidos.

La nueva Constitución parecería ignorar por completo el problema de la legitimidad y creer que el poder puede ser concebido como mera fuerza. Lo que indica que el realismo de la nueva doctrina es, al menos, cuestionable. Incluso podemos decir que hoy, cuando la nueva doctrina apenas acaba de ponerse en marcha, ya ha logrado debilitar de manera considerable la legitimidad del poder político de los Estados Unidos en el escenario internacional. En este nuevo cuadro, muchos actores sociales y políticos, y gran parte de la opinión pública del mundo, parecen haber aceptado la incertidumbre de las circunstancias presentes y haber decidido asumir los riesgos implícitos en toda acción política democrática. Puede que el resultado militar del proceso que hoy se inicia sea relativamente fácil de predecir. El resultado político, en cambio, dista mucho de ser evidente. □

Nota

¹ Norman Mailer, "Only in America", en *The New York Review of Books*, marzo de 2003, p. 51.

Lo que era posible hacer y no se hizo

La renuncia de un diplomático de los EEUU

Presentamos aquí el texto de la renuncia enviada al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, por Brady Kiesling, diplomático de carrera que ha cumplido funciones en distintas embajadas de Estados Unidos, desde Tel Aviv hasta Casablanca y Yerevan.

El 7 de marzo, Brady Kiesling renunció a sus funciones en el servicio exterior norteamericano denunciando la ofensiva de George W. Bush. Se trata prácticamente de un caso aislado (sólo hubo otros dos funcionarios que renunciaron públicamente) de un funcionario menor, consejero político de una embajada de segunda categoría, como se considera a la representación en Grecia, donde aquel actuaba en ese momento.

Y en ese peso menor de Kiesling radica, precisamente, su relevancia: no por lo que representa diplomáticamente, sino porque en su escasa repre-

sentación denuncia el enorme vacío sobre el que avanzó el Partido Republicano. Como testimonio de época, su carta demuestra lo que era posible hacer y no se hizo. Si la ofensiva mundial de Bush es posible, en buena parte se debe a que el país ha sido mudo testigo de ese proceso: a que, finalmente, la articulación prolija y contundente de un discurso opositor haya quedado en boca de un funcionario diplomático destinado en Atenas y no a cargo de quienes tienen en sus manos la posibilidad de influir decisivamente en la toma de decisiones de los Estados Unidos. ES

Documento presentado

Estimado Señor Secretario: Le escribo a usted para presentarle mi renuncia al Servicio Exterior de los Estados Unidos y a mi puesto de Consejero Político de la Embajada de Estados Unidos en Atenas a partir del 7 de marzo. Lo hago con pesar en el corazón. Mi formación incluyó la sentida obligación de devolverle algo a mi país. Cumplir funciones como diplomático de los Estados Unidos fue un trabajo de ensueño. Se me pagó para entender idiomas y culturas extranjeras, para acercarme a diplomáticos, políticos, académicos y periodistas, y persuadirlos de que los intereses de los Estados Unidos y los de ellos son, fundamentalmente, coincidentes. Mi fe en mi país y en

sus valores fue el arma más poderosa de mi arsenal diplomático.

Es inevitable que luego de veinte años en el Departamento de Estado me haya hecho algo más sofisticado y cínico a la hora de ver los motivos egoístas y burocráticos que, algunas veces, les dan forma a nuestras políticas. La naturaleza humana es lo que es, y yo era premiado y promovido por entender la naturaleza humana. Pero hasta la llegada de este Gobierno, me había sido posible creer que al defender las políticas de mi Presidente yo estaba defendiendo también los intereses del pueblo americano y del mundo. Ya no creo en eso.

Las políticas que se nos pide desarticular ahora son incompatibles

NOVEDADES

Siglo XXI Editores Argentina



TULIO HALPERÍN DONGHI
LA ARGENTINA Y LA TORMENTA DEL MUNDO
Ideas e ideologías entre 1930 y 1945
COLECCIÓN HISTORIA Y CULTURA, dirigida por LUIS ALBERTO ROMERO



CLAUDIA GILMAN
ENTRE LA PLUMA Y EL FUSIL
Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina
COLECCIÓN METAMORFOSIS, dirigida por CARLOS ALTAIRABANO

Otros títulos publicados:
HUGO VEZZETTI: PASADO Y PRESENTE (Segunda edición)
RICARDO SIDICARIC: LOS TRES PERONISMOS (Segunda edición)

Lavalle 1634 11 A (C1048AAN) • Buenos Aires • Tel.: 54 (11) 4373-8516 • sigloxxi-arg@directics.com.ar

no sólo con los valores estadounidenses, sino con los intereses estadounidenses. Nuestra búsqueda fáctica de una guerra con Irak nos está llevando a dilapidar la legitimidad internacional que ha sido, desde los días de Woodrow Wilson, nuestra arma más potente, tanto ofensiva como defensiva. Hemos empezado a desmantelar la red de relaciones internacionales más extensa y efectiva que el mundo jamás haya conocido. Nuestro actual rumbo traerá inestabilidad y peligro, no seguridad.

El sacrificio de los intereses globales en favor de políticas domésticas o de los propios intereses de la burocracia no es algo nuevo y, ciertamente, no es un problema únicamente estadounidense. Aun así, no habíamos visto una distorsión tan sistemática de las tareas de inteligencia, una manipulación tan sistemática de la opinión de los norteamericanos, desde la guerra de Vietnam. La tragedia del 11 de septiembre nos dejó más fuertes que antes, ya que aglutinó alrededor de nosotros una amplia coalición internacional decidida a cooperar, por primera vez, en la búsqueda de un camino sistemático contra la amenaza del terrorismo. Pero en lugar de atribuirse ese éxito para construir sobre esa base, esta administración ha elegido hacer del terrorismo una herramienta de política doméstica, alistando a una meneguada y en su mayoría derrotada Al Qaeda como su aliado burocrático. Esperamos un terror desproporcionado por entre el público ligando arbitrariamente a Irak con los problemas del terrorismo, que no están relacionados. El resultado, y quizás el motivo, es la justificación de una vasta realocalización de los ya encogidos fondos públicos hacia las fuerzas armadas, y el debilitamiento de las salvaguardas que protegen a los ciudadanos americanos de la pesada mano del Gobierno. El 11 de septiembre no dañó tanto el tejido de la sociedad estadounidense como nosotros parecemos determinados a dañarlo. ¿Nuestro modelo es el de la Rusia de los últimos Romanov, un

imperio egósta y supersticioso yendo hacia la autodestrucción en el nombre de un *statu quo* condenado al fracaso?

Deberíamos preguntarnos por qué hemos fracasado en persuadir a la mayoría del mundo de que es necesaria una guerra con Irak. Durante los últimos dos años, hemos hecho demasiado para convencer a nuestros aliados del mundo de que los intereses estrechos y mercenarios de los Estados Unidos predominan por ellos. Aun allí donde nuestras intenciones no estaban en cuestión, la consistencia de nuestros actos estaba en debate. El modelo de Afganistán es poco consuelo para aliados que se preguntan sobre qué bases planeamos reconstruir Medio Oriente, y sobre la base de qué imagen e intereses. ¿Estamos de hecho engeceguados—como Rusia es ciega en Chechenia, como Israel es ciega en los Territorios Ocupados—frente a nuestra propia percepción, frente al hecho de que la superioridad del poder militar no es la respuesta al terrorismo? Después de que los desastres de la posguerra en Irak se sumen a los desbarajustes de Grozny and Ramallah, tendrá que ser muy valiente el extranjero que cierre filas junto a Micronesia para seguir nuestro liderazgo.

Aún tenemos una coalición, y es una buena coalición. La lealtad de muchos de nuestros amigos es impresionante, un tributo al capital moral americano acumulado durante un siglo. Pero nuestros aliados más cercanos están menos persuadidos de que la guerra esté justificada y del peligro de dejar que los Estados Unidos se encaminen a un total solipsismo. ¿Por qué nuestro Presidente permite el tono fanfarrón y desafiante que los funcionarios más altos de esta administración tienen en su relación con nuestros amigos y aliados? ¿Es que acaso *oderint dum metuantur** se ha convertido verdaderamente en nuestra consigna?

Lo invito a usted a que escuche a los amigos de Estados Unidos alrededor del mundo. Aun en Grecia,

descripta como un semillero europeo de antinorteamericanismo, tenemos más amigos de los que el lector estadounidense de diarios puede imaginar. Aun cuando se quejan de la arrogancia norteamericana, los griegos saben que el mundo es un lugar difícil y peligroso, y quieren un sistema internacional fuerte, con los Estados Unidos y la Unión Europea colaborando de manera firme. Cuando nuestros amigos están temerosos de nosotros más que por nosotros, es tiempo de preocuparse. Y hoy, ellos están temerosos de nosotros. ¿Quién les dirá a ellos convincentemente que los Estados Unidos es lo que era, un faro para la libertad, la seguridad y la justicia de todo el planeta?

Señor Secretario, he tenido un respeto enorme por su carácter y por su habilidad. Usted ha conservado más credibilidad internacional para nosotros de la que nuestra política merece, y ha rescatado algo positivo de los excesos de una administración ideológica y autorreferencial. Pero su lealtad con el Presidente va demasiado lejos. Estamos tensando más allá de sus límites un sistema internacional que construimos con tanto afán y aprecio: una red de leyes, tratados, organizaciones y valores compartidos que pone límites a nuestros enemigos mucho más efectivamente de lo que jamás haya logrado la propia capacidad de los Estados Unidos para defender sus intereses.

Estoy renunciando porque he tratado y he fracasado—de reconciliar mi conciencia con mi habilidad para representar a la actual administración de los Estados Unidos. He tenido confianza en que nuestra democracia finalmente se autocorrigiera, y tengo la esperanza de que—con mi pequeño aporte—yo pueda contribuir desde afuera a darles forma a políticas que sirvan mejor a la seguridad y a la prosperidad del pueblo norteamericano y del mundo que compartimos. □

Tradujo Ernesto Semán

* Que nos odien, siempre y cuando nos teman (N. del T.).

Tiempo de malabarismos políticos

Cien días de Lula en el poder: ilusión en duda

El coquetto Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial diseñada por el legendario arquitecto comunista Oscar Niemeyer, se ha convertido desde el 1 de enero en una meca del turismo brasileño. A las puertas del edificio, una legión de personas que visitan la capital inaugurada en 1960 se congrega cada día para llevarse una foto o un autógrafo del ex tornero mecánico Luis Ignazio Lula da Silva, el primer brasileño de origen obrero que llega a Presidente. Lula ha convertido su contacto con la población en una de las marcas más fuertes de sus primeros días de gobierno. El Presidente saluda, sonríe, se toma fotos y ordena detener el auto oficial según su voluntad para conversar con anónimos y humildes ciudadanos, lo que enlance a su custodia. Visita fábricas—en algunos casos, las mismas en las que dirigía huelgas en la década del 80—, recorre *favelas* y repite a los cuatro vientos que su obsesión es crear empleos y acabar con el hambre en Brasil, un mal que padecen 22 millones de personas.

Martín D. Sión (desde Brasilia)

A primera vista, mucho ha cambiado en Brasilia desde la llegada de Lula al Gobierno el 1 de enero. Pero la naturaleza de los cambios no agrada demasiado a algunos compañeros de ruta del ex sindicalista en su carrera hacia el Palacio del Planalto, una larga espera de 22 años en la que su Partido de los Trabajadores (PT) ofrecía soluciones rápidas y eficaces para los males seculares de Brasil: la pobreza, la violencia y la abismal desigualdad social del último país americano en abolir la esclavitud.

En la ciudad más moderna de América Latina, construida e inaugurada por el soñador presidente Juscelino Kubitschek, ya no hay *nouvelle cuisine* en los palacios presidenciales. La primera dama, doña Marisa Lula da Silva, ha dispensado de los servicios a la afamada cocinera Roberta Sudbrack—autora del arroz con pato que durante años encantó a Fernando Henrique Cardoso—, para preparar ella misma el

plato preferido de Lula: polenta con rabo de ternera. Y en la Granja do Torto, una residencia campestre de la presidencia de Brasil ubicada en las afueras de Brasilia, el menú de casi todos los fines de semana es el asado, que el Presidente ofrece a sus visitantes: gobernadores, parlamentarios, funcionarios de gobierno y hasta celebridades políticas, entre ellas, el perpetuo jefe de Estado cubano Fidel Castro. Aprovechando una reciente visita de Niemeyer a Brasilia, el Presidente pidió al renombrado arquitecto, que a los 95 años continúa trabajando en su estudio de Río de Janeiro, que subsane una de las cacerías de la Alvorada y diseñe una *churrasqueira* (parrilla) acorde con el conjunto edilicio, que ha merecido la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Rumbo ortodoxo

El presidente Lula no utiliza las punzantes ironías que tanto gustaban a su antecesor. En cambio, en tono paternal, compara a los brasileños

con su hijo adolescente. Se emociona en público, se da el gusto de criticar con furia al presidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo incluye por propia voluntad condiciones más exigentes para el país en sus acuerdos con el FMI; y usa metáforas futboleras para justificar la despaciosa marcha de su Gobierno. "Yo no tengo prisa. Vean que, cuando Portuguesa Santista fue al ataque, el San Pablo le marcó cinco goles, y cuando jugó bien sólo perdió uno a cero", dijo hace poco, en una frase que llevó a un columnista a preguntarse si el ambicioso proyecto de Lula consistía en transformar a Brasil en un defensivo equipo de fútbol como el Portuguesa Santista, y en el mejor de los casos, perder por pocos goles.

Lo cierto es que en los primeros tres meses de Lula en la presidencia de Brasil, el Banco Central ha aumentado dos veces las tasas de interés para combatir el alza de los precios, el enemigo público número uno identificado por el equipo económico del mandatario obrero. Para ganar la confianza del sector financiero, Antonio Palocci, el médico que ocupa el cargo de Ministro de Hacienda, decidió aumentar la meta de superávit primario—que excluye el pago de intereses de la deuda—a 4,25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde 3,75 por ciento. El incremento obligó al Gobierno a anunciar—en una caótica conferencia de prensa—un ajuste presupuestario de 14 mil millones de reales, destinado a cumplir con el ahorro presupuestario buscado de unos 68 mil millones de reales en el año—el mayor de la historia—, que se destinarán principalmente a pagar intereses.

La promesa de que ese ajuste no llegaría a las áreas sociales declaradas prioritarias por Lula fue rápidamente desmentida, y dejó prácticamente inoperantes ministerios como

el de Integración Nacional y el de Ciudades, además de quitarles fondos a las carteras de Educación y de Salud.

„Sirve, para combatir la inflación, aumentar las tasas y cortar el crédito? Sólo si se fuera a radicalizar la política reactiva. La apuesta del Gobierno de Lula es que no será preciso radicalizar la recesión. Si el Gobierno ofrece a los mercados financieros, en nombre de la confianza, nuestros brazos, no tendrá que ofrecer nuestras piernas. Comenzará el dinero a llover de nuevo. La confianza permitirá bajar las tasas. Las tasas más bajas posibilitarán el crecimiento. El crecimiento nos dejará cuido lo social. Todo es muy insistido y repetidamente desmentido por lo que ha pasado en el mundo cercano. Van a querer las pilosas también”, escribió días atrás el filósofo Roberto Mangabeira Unger, ex asesor del derrotado candidato a presidente Ciro Gomes.

La política económica de Lula, vista como una continuidad de la de Cardoso, provoca escalofríos entre los llamados radicales del ala izquierda del PT y antiguos aliados de Lula, como la Central Única de Trabajadores (CUT), y aplausos entre políticos y economistas enrolados en la ortodoxia monetarista, entre ellos, el ex todopoderoso Ministro de Hacienda de los gobiernos de línea dura de los generales Costa e Silva y Enfilio Médici, el hoy diputado Antonio Delhim Netto. La CUT, por ejemplo, acusó a Lula de no tener programa alguno, y la patronal Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) manifestó su preocupación por el encarecimiento del crédito.

En busca de alianzas

Para garantizar la gobernabilidad de Brasil, el Presidente se ha lanzado a buscar una alianza con el dividido Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de gran presencia parlamentaria, que apoyó al gobierno de Cardoso y a su candidato en la elección que ganó Lula, el ex senador José Serra. Una alianza con el

PMDB, del que ya logró cooptar un sector liderado por el ex presidente José Sarney, hoy titular del Senado, daría a Lula una mayor facilidad para aprobar las críticas reformas del deficitario sistema de seguridad social y del intrincado sistema tributario del país. Sin embargo, el sector mayoritario del PMDB aún no ha dado el sí, y sus dirigentes muestran pocas señales de que podrían dar un apoyo concreto a Lula.

En la oposición, el PT fue un feroz crítico de los proyectos que hoy impulsa desde el Gobierno, lo que no impidió que en la primera revisión trimestral de su acuerdo con el FMI, hecha en febrero, prometiera enviar al Congreso antes de junio las propuestas de reformas, hoy sometidas a un intenso debate en cuerpos integrados por vastos sectores sociales creados por Lula para “buscar consensos”.

El semanario *Veja*, el principal del país, se burló recientemente de la fruición con la que Lula y su equipo lanzan foros para debatir proyectos. “Bla bla bla en el reino de Lula”, tituló la revista, en una nota en la que afirmó: “(...) para todo, el Gobierno tiene una salida: una reunión, un encuentro, un foro, en fin, siempre un amplio debate. La fórmula acostumbra a funcionar en movimientos sociales, sindicatos, entidades estudiantiles, asociaciones de barrio o partidos políticos, pero no se tiene noticia de que sea un instrumento eficaz para gobernar”.

El senador Heráclito Fortes, del derechista Partido del Frente Liberal, lo puso en blanco sobre negro: “Estamos en un lugar peligroso. Nosotros no sabemos ser oposición y el PT no sabe gobernar”, dijo. Los dirigentes del PFL han participado en todos los gobiernos que tuvo Brasil en los últimos 30 años, dictaduras incluídas.

Lo cierto es que hasta el programa estrella de Lula, el plan Hambre Cero, ha tenido dificultades para ser implementado y su jefe organizador, el Ministro de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, José Graziano, fue apartado del contacto diario con

la prensa. En su lugar, Lula colocó a Frei Betto, un hombre de su extrema confianza que buscará agilizar la puesta en marcha del más ambicioso proyecto social de América latina.

El ex presidente Cardoso no tuvo compasión por el proyecto ideado por Graziano y adoptado por Lula como eje de sus programas sociales. “Ésa idea es antigua. Es del tiempo de Betinho (el sociólogo Herbert de Souza, muerto en 1997) y fue en cierta forma implantada en el gobierno de Itamar Franco (1992-1994) a través del Consejo de Seguridad Alimentaria. Nosotros acabamos con ese consejo no porque no tuviera buenos propósitos sino porque era ineficaz. Distribuir alimentos requiere una logística cara que tiende a la ineficiencia. Es complejo juntar y distribuir alimentos sin desperdicios. Por eso, en mi gobierno pusimos énfasis en la distribución del ingreso”, dijo en una reciente entrevista con *Veja*, tras regresar a Brasil luego de pasar dos meses en París.

Mientras la prensa comienza a criticar lo que califica como un estilo poco ejecutivo de Lula en el Gobierno, el propio partido del presidente brasileño muestra algunas grietas por el abrazo de su líder a la ortodoxia monetarista que combatió durante años. Con una bancada propia de 91 diputados, aproximadamente un tercio pertenece a la llamada ala “chitita” del PT, que reclama una ruptura con el Fondo Monetario Internacional y la adopción de un Plan B en materia económica, acorde con las ideas originales de la agrupación, nacida en 1980 de las huelgas sindicales contra la dictadura que gobernó Brasil hasta 1985. Para acallar el descontento, Lula ha intentado cerrar el acuerdo con el PMDB, que le permitiría obtener una fácil mayoría en el Congreso; pero hasta ahora no tuvo éxito. Su gobierno, de cuatro años, recién comienza. Su popularidad, aunque menguante, sigue siendo altísima, y el crédito para su gestión se mantiene abierto. Sin embargo, el virus del escepticismo ha empezado a recorrer la capital brasileña. □

Qué es lo que puede hacer la política democrática

Por una redefinición del espacio público democrático

La democracia que cambia plantea el problema de la creación de nuevos lugares de resolución de los conflictos sociales.

Salvatore Veca

Es un hecho de la vida que tendamos a leer e interpretar el cambio social y las metamorfosis de las instituciones con las miradas heredadas del pasado. Sabemos acerca de la calidad y el rendimiento de nuestras instituciones democráticas, y tenemos, por cierto, alguna idea heredada de democracia representativa. Exploramos las transformaciones de la vida de las personas en nuestra sociedad tratando de reconocer algo familiar en un paisaje que, incansante y más o menos bruscamente, se altera y se deforma.

No hay nada malo en todo ello. Estamos hechos de esa madera. Sin embargo, hay circunstancias en las que puede valer la pena tratar de ponernos a prueba de un modo más radical cuestionando un amplio capital de creencias o teorías consolidadas. Es en estas circunstancias en las que los modos usuales de mirar las cosas parecen perder sentido y en las que también nuestros modos usuales de nombrar las cosas se ven afectados por la incertidumbre. Este es precisamente el caso, como ahora se acostumbra decir, en el que la incertidumbre reclama teoría. Si se acepta el desafío, naturalmente deberemos preguntarnos —en esta época y en la parte rica del mundo— cuáles son las transformaciones que afectan a los sujetos de la política democrática y cuál es el espacio que la política democrática tiene en la vida de las personas. Pero podemos también preguntarnos, de un modo asimismo más radical, en qué consiste propiamente y cuál es la naturaleza de la actividad política. O, más aun, interrogarnos acerca de qué es lo que pue-

de hacer la política democrática.

Tener poder político es tener poder para hacer qué cosa. ¿Es tener poder para hacer cosas en competencias o contra otros que tienen otro tipo de poder, sea éste económico, científico, tecnológico, cultural, religioso o judicial? Pero, además, ¿poder sobre quién y dónde?

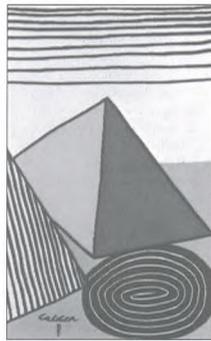
Los procesos de desterritorialización son evidentes. Por nuestra parte basta ver las cuestiones relativas al proyecto o proceso de la Unión Europea. Y dado que estamos hablando de la transformación de sujetos y de la naturaleza de la política democrática, es natural que estas demandas se formulen, como se dice, *a parte populi*, sobre las formas de control y de la responsabilidad.

El primer problema es cómo los

ciudadanos y ciudadanas pueden elegir y evaluar gobernantes, y cómo y por qué pueden actuar políticamente en el espacio público. Puede advertirse que el ejercicio que propongo tiene que ver con la teoría política descriptiva, es decir, aquella que tiende a decirnos cómo están las cosas y no cómo ellas deben estar, a la luz de algún criterio. Si queremos referirnos a nuestros compromisos normativos, entonces deberemos preguntarnos cuáles son nuestros criterios acerca del juicio político o, en otros términos, cuál es nuestra idea de sociedad justa o deseable. Pero antes de extender el ejercicio a la teoría política normativa, es oportuno detenerse en otra clase de transformaciones sobre las que podemos interrogarnos: cuando desde el paisaje de las instituciones desplazamos el reflector al paisaje social. Aquí nos medimos con aquellas circunstancias que cambian nuestras vidas de personas, nuestros modos de vivir y convivir. Como he sostenido muchas veces, estoy convencido de que éste es el espacio en el que encontramos las raíces del cambio que tiene efectos sobre la política, sobre sus sujetos y sobre la naturaleza de sus instituciones.

La tesis de la prioridad de la sociedad sobre la política sostiene que, en condiciones ordinarias, el paisaje social es modificado por procesos, fenómenos o eventos económicos o científicos o tecnológicos o culturales, y que esto impulsa variaciones en el rol o en la importancia de la política. En pocas palabras: ingeniería genética, inteligencia artificial, globalización financiera, migraciones o Internet generan efectos que alteran nuestros modos de vivir y de convivir. Más precisamente: remodelan las distribuciones de vencedores o perdedores sociales, los criterios de inclusión y exclusión social, el mapa de nuestras identidades y, por tanto, de los intereses y de las expectativas.

En la política democrática deberíamos poder competir a tales efectos con respuestas alternativas. Será responsabilidad de la mayoría elegir, dentro de la gama de soluciones disponibles,



Pirámides y líneas, detalle (1971)

aquellas que logren puntos de equilibrio, en caso de inestabilidad, si es que vale la tesis de la prioridad del cambio social, tesis que, por otro lado, le gustaba a Isaiah Berlin. Así las cosas, no es difícil focalizar la tensión esencial de valor político entre alguna forma de "libertarismo" y alguna forma de igualitarismo de las oportunidades, o, como yo preferiría, entre un "libertarismo" de derecha y uno de izquierda, al menos en el espacio europeo. Pero con estas observaciones me he encaminado inevitablemente hacia un campo que está a medio camino entre la teoría descriptiva y la teoría normativa. Será útil, por tanto, retomar el ejercicio a propósito de la mejor filosofía política democrática. Para hacer esto, consideremos una noción que es central en la perspectiva de dos figuras influyentes en la discusión de los últimos años: John Rawls y Jürgen Habermas. Se trata de la noción de espacio público o, si se quiere, de la

esfera pública. La noción es central porque la *silhouette* del espacio público es aquella en la que se repite, en un paisaje que se ha modificado, la venerable máxima de Pericles que le gustaba tanto a Popper: en la *polis* cada uno tiene igual capacidad de juicio sobre las cosas políticas y la discusión pública es la mejor premisa para la sabia deliberación. No obstante las diferencias, la perspectiva de Rawls sobre el liberalismo político y la de Habermas sobre la democracia deliberativa convergen en la idea de que una democracia pluralista encuentra en el uso público de la razón su principal recurso. La esfera pública presupone compartir, por parte de los ciudadanos, valores políticos fundamentales o criterios éticos que deben ser satisfechos para que intereses o necesidades y pretensiones o expectativas sean admitidos en el ámbito de la "conversación" que se realiza en la *polis*.

Ahora bien, creo que este modelo

canónico del espacio público es, por un lado, irrenunciable y, por el otro, intrínsecamente incompleto. ¿Por qué? El modelo canónico no toma en serio las transformaciones del espacio público, cuando se pasa de su versión liberal a su versión democrática. El modelo canónico prevé que individuos cuyas identidades son estables gracias a recursos y a reconocimientos sociales, y no políticos, participen en la discusión pública respecto de los intereses y de las políticas. El modelo canónico ofrece soluciones a casos de conflicto distributivo. Pero, desde el origen, nuestras democracias pluralistas están caracterizadas por otro tipo de conflicto, al que llamaremos, siguiendo una propuesta de Alessandro Pizzorno, conflicto por el reconocimiento o conflicto de identidad.

Los conflictos que modelan el espacio público democrático son, en una variedad de circunstancias, conflictos por el reconocimiento de quien está excluido. Y es la resolución de tales conflictos viejos o nuevos, en el caso de que se logre tal resolución, lo que torna razonable la participación en la esfera pública. Porque, en este caso, la apuesta política es la del reconocimiento de identidades, excluidas o inestables. Y esto da cuenta del hecho de que compartir valores políticos fundamentales o criterios para la discusión pública no es un presupuesto, sino un resultado, en los casos afortunados, de formar parte, participando, de la discusión en el espacio público.

Dos podrían ser entonces las políticas dignas de mención: 1) modular instituciones que funcionen como árbitros, de todos los participantes, y 2) reducir, todo lo que sea posible, las desigualdades y las desventajas que, para quien está menos favorecido en la sociedad, tornan patética o hipócrita, o lo que es peor, incomprensible, la antigua promesa democrática de poder ser *partner* de igual dignidad en el espacio público de nuestras democracias de este siglo. □

Tomado de *Il sole*, 24 ore. Tradujo Jorge Tula.

LIBROS

Agenda de las brechas jurídicas que humillan a Latinoamérica

La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Juan E. Méndez, Guillermo O'Donnell y Paulo S. Pinheiro, comp. Paidós, Buenos Aires, 2002.

La interesante colección "Latinoamericana" de Editorial Paidós, dirigida por Sebastián Mazzuca, ha publicado recientemente *La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina*, compilado por Juan E. Méndez, Guillermo O'Donnell y Paulo S. Pinheiro. El libro, aparecido originalmente en inglés en 1997, cuenta con una decorosa traducción de

ellos, mayoritariamente descriptivos, insistían en los evidentes defectos del sistema legal latinoamericano.

La primera virtud del trabajo colectivo, por su parte, tiene que ver con la elección del tema. En efecto, y tal como se deja en claro en la introducción, el prefacio y el cierre del libro, los países latinoamericanos representan hoy, en su gran

mayoría, "poliarquías" bien constituidas pero aun así enormemente deficitarias en la consolidación de su estado de derecho. Es claro que —y éste es un hecho notable e importante en toda la región— en una mayoría de países ha quedado superada la etapa de desapariciones, tortura sistemática, y persecución de disidentes, que marcó parte de las décadas del 70 y 80 en la región. Ahora bien, a pesar de aquel éxito extraordinario de la vuelta a la democracia (al menos, en su acepción de "poliarquía" aquí utilizada), los sectores de la población que siguen siendo víc-

timas de discriminaciones son todavía muy amplios. Como se dice en el libro: "[en] comparación con los peores grupos de opo-

ponentes políticos bajo los regímenes autoritarios, el número de grupos pobres y vulnerables luego de las transiciones democráticas es mucho mayor. Esas víctimas, blanco arbitrario del poder arbitrario bajo la democracia y la dictadura, son mucho más difíciles de identificar dado que no constituyen un grupo homogéneo". El texto, entonces, se ocupa de estos amplios grupos de la población "todavía" sujetos al poder arbitrario de la autori-

dad, y expone los problemas a los que se ven enfrentados tales grupos, tanto como la falta de soluciones —o las pobres soluciones que se han dado— frente a dichos problemas. Al mismo tiempo, comienza a examinar, en algunos de los textos que lo componen, posibles vías de salida frente a aquellos deficiente.

Las dificultades de las que se habla en el libro son muy serias, comunes a una mayoría de países latinoamericanos, y de naturaleza diversa: abuso policial, tortura y maltrato de detenidos, hacinamiento en las cárceles, múltiples formas

sociedad

Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Número especial 20/21

Marzo 2003

ARGENTINA DESVERTEBRADA: Enrique Marí, Pensar la Argentina / Eduardo Grüner, Del experimento al laboratorio, y regreso, Argentina, o el conflicto de las representaciones / Claudio Martiniuk, Doscientos años. ¿Cómo puede el pez cansarse del agua? / Nicolás Casullo, Apuntes sobre historia, dominios y políticas (viaje hacia el centro de la noche) / Horacio González, Memoria y errata: meditaciones sobre John William Cooke / Oscar Landi, El secreto y la política / Héctor Palomino, El movimiento de trabajadores de empresas recuperadas / Alejandro Grimson, La nación después del deconstructivismo. La experiencia argentina y sus fantasmas / Daniel Link, Literatura de compromiso / José Fernández Vega y Roberto Amigo, Un largo momento epigonal. Ideas para un collage sobre la condición del arte argentino / David Oubiña, Un mapa arrasado. Nuevo cine argentino de los '90.

VOCES ARGENTINAS: Ezequiel Martínez Estrada, Los derechos del hombre. Discurso inédito (1959).

DOSSIER ESPECIAL: 19 y 20 de diciembre de 2001.

sociedad es una publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo T. de Alvear 2230, (1122) Buenos Aires, Argentina. Teléfono (5411) 4508-3800, fax (5411) 4508-3818. issn 0327-7712. Distribución: Ediciones Manantial SRL, Av. de Mayo 1365, (1085) Bs. As., Argentina. Tel-fax (5411) 4383-7350/6059. E-mail: info@manantial.com.ar.



Mis cebollas

(1972)

de violencia doméstica, falta de acceso a los tribunales, aplicación inequitativa de la ley, marginación político-institucional (en particular, de algunos sectores tales como los grupos indígenas), etcétera. Los textos de los que se compone el libro dan buena cuenta de tales dificultades. Así, por ejemplo, Nigel Rodley y Paul Chevigny presentan un panorama acerca del (temible) papel que juega la policía en la región y de la permanencia de la tortura como práctica habitual en las cárceles. Ellos nos alertan, además, acerca de los problemas que generan la pobreza e inseguridad crecientes en Latinoamérica, con una población cada vez más sensible al discurso de la "mano dura" y una clase política bien abierta a recibir ese reclamo, una clase política cuyos miembros

parecen competir entre sí por ver quién endurece más sus promesas de acción contra los "delincuentes". Roger Dandler, por su parte, ofrece un interesante panorama acerca de la relación entre "tierra" y "derecho" en América latina. Marieclaire Acosta presenta una tenebrosa pintura sobre la discriminación y la violencia que sufre la mujer en México y los más bien inútiles y mal dirigidos esfuerzos realizados en pos de una reversión de dicha situación. Jorge Dandler realiza una muy detallada descripción acerca del estado del "derecho indígena", mostrando el modo en que muchos países han comenzado a reconocer en la letra de la ley los derechos de aquellos y, a la vez, las enormes distancias que todavía permanecen entre dicha letra y la práctica legal (un proble-

ma que afecta a los más de 40 millones de indígenas que viven en la región). En "Color e imperio de la Fry en Brasil", Peter Fry nos ilustra acerca de las diferencias que siguen separando a blancos y negros en Brasil, en lo que al derecho y el cumplimiento del derecho se refiere (contándonos, por ejemplo, que mientras los 62 por ciento de los negros sigue dependiendo de los defensores públicos para su defensa, sólo 39 por ciento de los blancos necesita recurrir a ellos). Ya en la última parte del libro, diferentes autores nos ilustran sobre algunos esfuerzos ya hechos en la región en pos de organizar cambios en los sistemas legales. Reed Brody, en este sentido, muestra de qué modo las iniciativas desarrolladas en Haití en favor de la reforma judicial resultaron socava-

das, más que favorecidas, por el principal país promotor de las mismas, los Estados Unidos. Jorge Correa Sutil examina equitativamente los avances y retrocesos de las reformas judiciales promovidas en América latina. En tal sentido, apuntala una conclusión que se trasluce también en otros textos de la compilación: las reformas judiciales han seguido, sobre todo, el ritmo impuesto por los grandes inversores—inversores que demandaban cambios en la justicia para dar certeza a sus inversiones, más que para ayudar de algún modo a los que están peor... De modo similar, Alejandro Garro hace un repaso de las causas de la falta de acceso a la justicia por parte de los sectores que más necesitan de ella. Al mismo tiempo, y también en consonancia con otros trabajos del libro, aventuro algunos juicios acerca de qué reformas legales podrían resultar en un mayor beneficio de quienes hoy están peor.

El volumen se enriquece, por lo demás, con el aporte de varios comentaristas que escriben, al final de muchos de los artículos citados, para precisar, avalar u objetar las tesis que se mantienen en tales artículos. Los tres compiladores, por su parte, aparecen en distintos estadios de la obra colectiva para

aportar sus puntos de vista, tomando una perspectiva más abarcativa y analizando secciones enteras del libro, o haciendo—como O'Donnell, al cierre del mismo—una siempre rica evaluación global de la obra.

Aunque, como es natural en toda compilación, los artículos son desparejos en su calidad y enfoques, el balance general es positivo. La misma representa un primer aporte significativo hecho desde las ciencias políticas latinoamericanas en torno al estado del Estado de derecho en la región. Cuando cerramos el libro queda frente a nosotros, anotada, una buena agenda de los problemas que debemos enfrentar si es que queremos acercarnos a ese "horizonte móvil" del imperio del derecho, si es que queremos avanzar en el proceso de "democratización interterminable", al decir de O'Donnell. Estos problemas son no nuevos, pero requieren, hoy más que nunca, una atención urgente por parte de las autoridades locales, los investigadores sociales y las organizaciones interesadas en la democratización de la región. Supera la primera y respetable oleada de problemas de este proceso de democratización—problemas vinculados con el terror militar anterior al inicio de dicho proceso—hoy sa-

luden a la luz estas otras dificultades hasta ahora ignoradas, ocultas, o simplemente postergadas. El hecho es que la afirmación de la "ciudadanía política" no se ha visto acompañada de una consecuente afirmación de los derechos civiles de la población. Frente a dicho panorama, la obra nos ayuda a ver que aquellas "sociedades duales" latinoamericanas de las que hablaban las ciencias sociales hace unas décadas, parecen sobrevivir impertérritas en el ámbito jurídico, don-

Roberto Gargarella

Una apuesta a la productividad de la Sociología

Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/ 1973-76/1989-99, Ricardo Sidicaro, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2002, 262 páginas.

Es una apuesta a la productividad de la Sociología para delimitar un objeto y realizar interpretaciones. Antes que las hipótesis, descripciones y periodizaciones, Sidicaro reconoce explícitamente su enfoque y lo fundamenta: es el punto de vista de la Sociología, y en particular, de la Sociología que hace de la conexión interpretativa de los sentidos atribuidos por los actores el material con el que se mezclan y se ligaban las referencias empíricas. La com-

prensión de las relaciones entre el Estado nacional, cuando estuvo a cargo del peronismo durante el siglo XX (1946-1955; 1973-1976; 1989-1999), el poder económico constituyen el área en donde la investigación recoge estas referencias. El marco conceptual del trabajo reconoce una serie de vectores de cuya composición resulta su orientación hacia el objeto. En primer lugar, la mirada webberiana inaugura la parte conceptual y se actualiza en diversos puntos específicos del

trabajo. Así, aparece, en primer lugar, como punto de partida de la investigación: es allí en donde el autor se ubica como "buscador de sentido" cuya "sabiduría para crear algo nuevo mediante la relación de hechos conocidos con puntos de vista también conocidos" (p.13) hace de las fuentes y de los datos desafiados a ser subsumidos en una hipótesis acerca del sentido que tuvieron para los actores.

Este punto de vista general se actualiza luego en dos cuestiones clave de la sociología política de Weber y del tema de este trabajo. Por una parte, la tipificación de los partidos políticos como máquinas de distribución de cargos (beneficios materiales y simbólicos de la función gubernamental) o bien de defensa y promoción de ideologías.

La otra cuestión es la de la coordinación o el ajuste entre formas estatales y relaciones económicas. Si esta coordinación evidencia, en un punto máximo de transparencia conceptual, una paridad entre calculabilidad del retorno de las inversiones y previsibilidad del régimen de protección de derechos, entonces nos hallamos frente a un capitalismo racional y a un Estado burocrático racional. A partir de allí, de las alteraciones e interferencias entre una y otra

esfera de acción humana resultarán otras modalidades de relación económica y de dominación política cuya correspondencia habrá que establecer interpretativamente. Y éste es, en una medida muy importante, el trabajo que Sidicaro se asigna en el libro: proponer vínculos entre el ejercicio de la dominación política desde el gobierno nacional por parte del peronismo y

el modo en que clases sociales y sectores de la producción, el comercio y las finanzas ejercieron el poder en la economía.

La estructura conceptual se completa, por un lado, con otras referencias de la teoría sociológica. En primer lugar, son las propuestas de Alain Touraine respecto de los "actores socioeconómicos predominantes" cuya capacidad de determi-

El politólogo

El politólogo, revista de difusión de ciencias sociales
Octavo 2003 • \$ 4

Venta en los quioscos desde el 1º de abril

En este número
Sobre el Plan Fénix

Reportajes
Aldo Ferrer
Pensar con lo nuestro para integrarnos al mundo
Jorge Schvarzer
Cómo re-industrializar la Argentina

Además, escriben
Fabian Bosser
América latina: ¿gobernabilidad democrática
sobre las ruinas del Estado?

•
Marcelo Baquero
El nuevo contrato social de Lula en Brasil:
límites y posibilidades

•
Horacio González
Salud y enfermedad en la terminología política:
a propósito de una reciente polémica

•
María Inés Tula
Los partidos políticos en la Argentina:
cambios y perspectivas

•
Héctor Palomino y Ernesto Pastrana
Movimientos sociales emergentes y reconstrucción
de lazos sociales: ¿el fin de los valores neoliberalistas?

•
Además: Calendario, libros, informes institucionales

Novedades

Critica de las ideas políticas argentinas, Juan José Sebrelli, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, 512 páginas.

La última noche de Juan Duarte. La misteriosa muerte del hermano de Evita, Jorge Camarassa, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, 256 páginas.

Freud en las pampas, Mariano Ben Plotkin, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, 352 páginas.

El último Foucault, Traducción

inédita al español de *Coraje y verdad*, presenta Tomás Abraham, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003, 416 páginas.

La sombra del águila. Por qué Estados Unidos suscita odios y pasiones en el mundo, Mark Hertsgaard, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003, 256 páginas.

La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Marcos Novaro y Vicente Palermo, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003, 576 páginas.

nación de los intercambios económicos no se traduce de una manera automática ni unificada al campo de la representación política, las que permiten seguir delimitando el objeto de estudio. Si de un lado están los partidos con sus matices en relación con qué es lo que quieren hacer del Estado, por otro están estos actores predominantes cuyo poder económico se vincula de diversos modos con las decisiones estatales. Son las variaciones en uno y otro campo, y sus relaciones, las que el trabajo evidencia. En las conclusiones, Sidicaro dará un paso más allá con los conceptos de Touraine: en los límites entre una clase dominante (con poder de determinación de los intercambios económicos) y una clase dirigente (con capacidad para hacer devenir este poder en una suerte de interés general, a modo de *devenir Estado*) es que se jugó la cuestión de la autonomía de la política y de la intervención del Estado en la economía.

El concepto de "campo" es otro instrumento teórico que permite esclarecer el objeto del trabajo. Remitiéndose a Bourdieu, el autor entiende por campo "un estado (...) de la distribución de capital específico que, acumulado en el curso de las luchas anteriores orienta las estrategias ulteriores" (p. 19).

Así, las capacidades estatales, la organización partidaria, sus recursos de movilización, su disciplina, son algunos de los elementos que variarán según las experiencias del gobierno peronista y que compondrán –al menos parcialmente– su capital específico. Por otro lado, de la gravitación en la reproducción y la orientación de la economía durante cada uno de esos gobiernos por parte de los actores socioeconómicos predominantes, y de su capacidad de condicionar las decisiones estatales (por motivos económicos o bien de organización política-corporativa, o bien de difusión ideológica), resultan sus capitales específicos.

Por último, son las referencias a Barrington Moore y a Skocpol, entre otros, las que ubican esta investigación en la tradición del análisis histórico comparativo de las relaciones entre transformaciones socioeconómicas y políticas.

Intervención, autonomía

Una definición de Bourdieu completada por Sidicaro permite circunscribir el objeto y determinar qué elementos serán relevantes en su interpretación: "entre todos los intercambios con el exterior del campo económico, los más

importantes son los que se establecen con el Estado", por lo que "las luchas empresarias por la maximización de ganancias incluyen necesariamente la disputa por las orientaciones estatales" (p. 21). *Sensu contrario*, las luchas políticas por extender el área de dominación incluyen la capacidad de condicionar y de negociar de los actores políticos sobre los actores e intercambios económicos. Así, los grados en los cuales los decisores políticos se imponen metas a sí mismos e interfieren en el flujo de la economía, como los grados en los cuales los actores económicos le imponen metas a la política e interrumpen el curso de sus decisiones, conforman los elementos de una tensión que recorre el trabajo.

En el primer capítulo ("La construcción del Estado intervencionista: políticos conservadores y actores socioeconómicos predominantes, 1930-1943") el autor rastrea las transformaciones del Estado que "crearon condiciones favorables para la posterior formación" del peronismo, a saber y principalmente, la intervención del Estado en la vida económica y social. Si bien ésta no era una idea nueva en 1930, en el período en cuestión su sentido cambiaba: tanto en lo que respecta al prota-

gonismo cuantitativo de esta intervención como a su significado para actores políticos y económicos.

Para los "actores socioeconómicos predominantes", la intervención del Estado en la economía –a través de juntas y comisiones reguladoras en el área productiva, de servicios y financiera– significó, también, la intervención de representantes de estos sectores en las decisiones políticas especializadas. Si en el plano institucional la Concordancia había rechazado el corporativismo como modo de reorganizar la Nación, la participación corporativa en las decisiones públicas era el signo de una modernización de la administración política de la economía.

Como luego diría un ministro peronista citado en el trabajo, la intervención siempre existe, en todo caso se trata de interpretar su signo.

Por su parte, la política descubriría en este período la relevancia de su autonomía en cuanto a su capacidad de decidir estrategias para la economía en general y en referencia a la obtención de recursos financieros para un Estado que debería comenzar a responder a demandas sociales nuevas.

La descripción de los trámites políticos y parlamentarios del Plan Pinedo y a la le-

gislación impositiva son dos buenos ejemplos de esta tensión: entre una política que intenta su autonomía para diseñar un modelo de país o bien para equilibrar las cuentas del Estado –representada por un conservadurismo que había roto puentes que lo ligaban a sectores de la economía– y unos actores predominantes que intentan limitar la redistribución del ingreso en términos privado/estatal según una ideología de la no intervención.

Indeterminados posperonismos

Esta tensión entre actores políticos y actores de la economía delimita el *locus* enunciativo del peronismo: la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, lo que en la era conservadora se representaba aún como una tensión entre lo político y lo económico, aparece ahora resignificado en términos de "lo social". Aquello que era disputado entre la apropiación estatal *versus* la apropiación privada de ingresos, aparece ahora dentro del juego capital/trabajo, en versiones que oscilan entre la confrontación y la armonía.

En las conclusiones de la investigación, Sidicaro usa conceptos de Ulrich Beck que le permiten ordenar sus descripciones sobre las

relaciones entre gobiernos nacionales peronistas y actores de la economía. Según esta visión, las identidades sociales y políticas, como así también la relación entre sociedad y Estado, pueden identificarse como propias de una primera modernidad y una segunda modernidad. A la primera correspondía el período 46-55, en el que la identidad peronista, construida torno de una identidad obrera, de unas capacidades de redistribución y de regulación del Estado-Nación, da sustento a un partido que distribuye recursos materiales y de decisión, y establece relaciones de confrontación y de cooperación con representaciones colectivas de los actores predominantes asimismo bien definidos en términos de clase y de ideología. Así, las pujas distributivas en torno de los saldos exportables del campo y del incentivo de la industria sustitutiva, como la distribución de ingreso a través de beneficios sociales y aumento de la participación de los asalariados, se corresponden con determinadas características de los antagonismos (pueblo contra oligarquía, o bien el Estado contra los productores) y con imágenes ideales (armonía entre capital y trabajo, comunidad organizada, o bien el libre

zas del mercado).

El papel desarrollado por el sindicalismo en ese primer período, pero sobre todo, el desplegado entre éste y el siguiente (73-76), así como la aparición de la Juventud Peronista como referente identitario son dos datos centrales para la interpretación de este último. El período, que corresponde a una transición entre modernidades signada por un voluntarismo político que radicalizó las significaciones atribuidas a las capacidades estatales, comenzó con la expectativa de la concertación y terminó con la desaparición de las reglas de coexistencia. En este proceso, la reconstrucción y posterior fragmentación de la identidad político-corporativa de los actores socioeconómicos dominantes aparecen como un factor clave de la imposibilidad de la inversión extranjera y la desaparición de actores de la economía

–micas (que comenzaron con cuestiones de acceso al crédito y terminaron en la queja por el retraso cambiario, en el caso de los ruralistas) y hacia decisiones políticas que formaron parte de los costos pagados por el Gobierno para sostener aquellas decisiones económicas (particularmente, en lo que hace a la reforma laboral). Estas críticas se amalgamaron en un discurso que, simultáneamente, sostenía aspectos centrales de la política del Gobierno, criticaba desde un punto de vista promercado otros y reivindicaba con un novedoso sentimiento nacionalista ciertos efectos de aquello que elogió. La heterogeneidad y fragmentación de los intereses de los actores dominantes –acentuadas por la apertura económica, la centralidad de la inversión extranjera y la desaparición de actores de la economía–

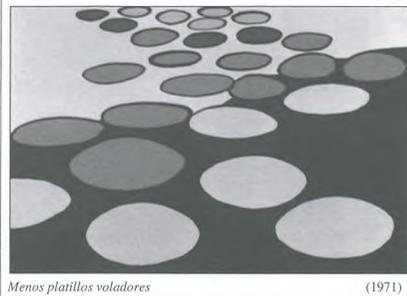
sustentaron estas paradojas.

La contradicción entre la reivindicación del efecto pacificador de la política monetaria y la falta de oposición a la política de endeudamiento externo e interno que la sustentó es uno de los datos que Sidicaro destaca para plantear reflexiones respecto de la etapa posterior a Menem. Si en la década del 30 se inauguró un espacio de intervención económica, que primero fue ocupado por la defensa de intereses sectoriales específicos, y que luego, en el primer peronismo, fue tomado por las decisiones favorables a la sustitución de importaciones y a la redistribución orientada al salario, y en el segundo por la débil actividad de arbitraje de las pujas en contexto inflacionario, en el tercero la intervención se caracteriza por la ocupación estatal de la demanda financiera,

con las consiguientes distorsiones en el mercado del crédito y las cargas financieras a futuro.

Es de este último tipo de intervención que es heredera la etapa posterior a Menem; y de sus consecuencias, la crisis política de la Alianza, como así también los desafíos que enfrentará el próximo gobierno. El seguimiento y la descripción del comportamiento de los actores socioeconómicos predominantes que Sidicaro realiza es útil seguramente para pensar las posibilidades y los límites con los que contarán las futuras decisiones económicas; en particular en lo que hace a la viabilidad política y a la capacidad de condicionamiento y de consenso función de la debilidad, la fragmentación y la heterogeneidad con las que el siglo XXI los encuentra. □

Hernán Charosky



Menos patillos voladores

(1971)

ENSAYO

Nobleza y servidumbre de la política

Michel Rocard*

Intelectual de merecido prestigio y destacado dirigente del socialismo francés,

Michel Rocard ocupó diversos cargos partidarios y de la función pública, con las más altas responsabilidades. Actualmente

El tema sobre el que me han invitado a reflexionar es precisamente el de este título. Frente al profundo y complejo cambio de civilización que estamos viviendo, frente al incremento conjunto de la violencia y de la pobreza, la dificultad creciente de asegurar un empleo estable y correctamente remunerado para todos, o el agravamiento mundial de las diferencias entre ricos y pobres, el descrédito de la política, es decir, el debilitamiento de su función reguladora, es un elemento menor sólo en apariencia. En parte se trata de la clave de su incapacidad para hacer frente a esta situación. Toda profesión conlleva cierta nobleza. El drama de la política es que, en ella, esta nobleza es menos visible que en muchas otras profesiones.

Los alcaldes se salvan

En Francia se realiza un sondeo anual muy conocido en el que se pide a nuestros conciudadanos que clasifiquen, por orden de preferencia, las profesiones de hoy en día. Los médicos, cantantes, deportistas, exploradores y astronautas aparecen siempre a la cabeza, y al final de la lista, los jueces, periodistas y políticos. Se observa, sin embargo, una extraña excepción: los alcaldes siempre figuran en el pelotón que encabeza la lista. Así pues, no todo está perdido para la política: existe un nivel de responsabilidad y un tipo de cargo político que, finalmente, la opinión pública respeta. Sin embargo, la opinión pública trata claramente a los alcaldes como si no fuesen políticos mientras que, a estos últimos, los rechaza implacablemente. No obstante quiero dar fe aquí de que la política también tiene su grandeza. Hay nobleza y, sin duda, satisfacción personal cuan-

es diputado por Francia en el Parlamento Europeo. Presentamos aquí el texto de una conferencia suya sobre el valor de la política, pronunciada en los tiempos de máximo descrédito de esta actividad.

do se ayuda a los necesitados. Yo mismo he tenido la posibilidad de crear y establecer el salario mínimo de inserción. Tras la votación, me sentí muy orgulloso de los medios que me proporcionaba mi profesión.

También hay nobleza y, por lo tanto, satisfacción para quien la busca, cuando se construye algo. Dejar la huella de una obra construida que refleje la voluntad de algún grupo de personas de garantizar un servicio permanente, sobre todo si la suerte hace que el arquitecto haya estado inspirado, da una gran tranquilidad de espíritu. Desde mi cargo de alcalde pude experimentar con intensidad esta emoción.

Finalmente, la nobleza suprema de la profesión del político, que incluye la posibilidad de hacer la guerra, es naturalmente la de poder hacer la paz. Se trata de un arte difícil, poco frecuente. Tuve la oportunidad de poder acabar, tras una negociación de ocho semanas, con la guerra civil entre las comunidades de Nueva Caledonia. La noche del acuerdo no dudaba de la grandeza de la profesión que había escogido.

El pacto o la fuerza

¿De dónde procede entonces este descrédito, esta decepción, esta pena cívica que comentaba al principio? Primero hay que señalar que la profunda conflictividad de la política es un problema de siempre. Los sultanes turcos hacían asesinar sistemáticamente a sus hijos por temor a que se convirtieran en sus rivales. No cabe duda de que esto tiene que ver con la importancia de lo que domina y administra la política: la violencia y el dinero. Sea cual fuere la relación, aceptada o no, que tenga algo

trascendente, todo sistema de poder tiene como finalistas terrenales el control de la violencia y el reparto del dinero. Ejército, justicia, policía, moneda e impuestos son la sustancia profunda de la autoridad política. Lo demás —educación, protección social, infraestructuras de higiene y salud, etcétera— es contingente, está ligado al nivel de complejidad alcanzado por la sociedad y, de hecho, es ajeno a la naturaleza del poder. No es posible hacer buenas normas que gusten a todos y no perjudiquen los intereses de algunos.

Hacer la guerra o la paz no es nunca una decisión aprobada unánimemente. Además, los ingredientes del juego político también tienen su parte de responsabilidad en el espectáculo dado por el conjunto. En la omnipresente búsqueda de una legitimidad del poder, se combinan ideas, símbolos, intereses y personas. Los únicos que permiten alcanzar acuerdos y que se adaptan bastante bien a ellos son los intereses. Sobre las ideas ya es mucho más difícil transigir, y sobre los símbolos, imposible. En cuanto a las ambiciones y al carisma de las personas, su relativa compatibilidad con el arte de alcanzar acuerdos constituye la trama principal de la historia humana. La importancia de los símbolos en la lucha política es, probablemente, lo que mejor demuestra la mala prensa de la cultura del pacto; y es clave en la decepción de la política. En el fondo, el poder sólo dispone de dos armas: la fuerza o el pacto, eventualmente apoyado por el dinero. El pacto es el único capaz de organizar la vida en sociedad. La fuerza zanja los asuntos pero no reconcilia a la gente. Sin embargo se interfiere con los símbolos. No hay pacto sin decepción simbólica. Durante mucho tiempo, he pensado sobre la pasión con que mi generación apoyó a los guerrilleros de Fidel Castro contra el terrible dictador Batista, y más tarde, sobre su apoyo a la lucha del pueblo vietnamita contra los norteamericanos, mientras que no mostró ningún interés por la extraordinaria construcción de la democracia llevada a cabo por el pueblo español tras la muerte de

Franco. Y no era sólo un asunto de gente joven: finalistas, escritores, cineastas, todos se implicaron. Una condición para rehabilitar la política es eliminar el romanticismo del fusil. La nobleza del pacto, al contrario, debería ser objeto de la filosofía y la teología: los símbolos, al igual que los tabúes, están por todas partes. No sólo se asocian a la soberanía y a la dominación de los territorios, sino que también rigen ampliamente toda la evolución legislativa del matrimonio, el divorcio y la herencia. Y, lo que es seguramente aun más peligroso para la estabilidad del mundo, rigen la moneda y los impuestos. En todos estos ámbitos, el pacto tiene costos importantes en términos de decepción y de pérdida de legitimidad. No obstante, el hombre necesita símbolos. Actualmente se tiende a llamarlos puntos de referencia, pero el debilitamiento de los puntos de referencia supone una crisis de civilización.

Hacer realidad las ideas

Hay que comprender la arquitectura del juego político para hacerse una idea exacta de sus servidumbres, de las dificultades en las que se ejerce la profesión y de su evolución reciente. "La política trata de ideas", dijo un día Albert Thibaudet. En mi opinión, es absolutamente falso. La política empieza donde acaba la simple elaboración de las ideas y donde aparece la voluntad de llevarlas a la práctica.



Huellas negras sobre rojo

(1970)

La profesión política comporta dos aspectos insolubles, en continua interacción, que es esencial distinguir correctamente. Al primer aspecto se lo puede calificar de ascendente. Es el arte de la conquista del poder y de su preservación, la búsqueda conjunta de la legalidad y de la legitimidad; en definitiva, la competición. El uso de la fuerza y de las prácticas electorales interviene en proporciones muy variables, según el grado de civilización. El otro aspecto es descendente. Es el del ejercicio de las funciones conquistadas, de la gestión en todos los sentidos del término, incluida la parte de innovación que conlleva. El aspecto ascendente, es decir la conquista permanente del poder, la competición, es el principal lugar de confrontación entre la fuerza y el derecho. Para poder analizar correctamente el proceso por el que la fuerza se somete al derecho, hay que situarse fuera de nuestras naciones desarrolladas y civilizadas de las Antiguas, respetuosas de los derechos humanos y la democracia representativa desde hace más de un siglo y medio. Las democracias desarrolladas sólo representan de hecho la quinta parte de la población mundial. Sea porque domina abiertamente, o porque apoya un sistema de poder que se regula más o menos sin ella, la fuerza nunca está lejos del poder. Después de todo, en este siglo Francia ha vivido cuatro situaciones en las que fue la fuerza la que creó una nueva legalidad o restableció una legalidad amenazada: 1940, 1944, 1958 y mayo de 1968. El recurso a la fuerza sólo se mitiga —después se hace difícil e incluso imposible— en la medida en que los mecanismos de transmisión de poder y de sucesión se consideran eficaces, previsibles y capaces de evitar la violencia. En este sentido, la adopción por parte de la opinión pública de estos procesos como alternativa preferible al uso de la fuerza, es lo que produce su rechazo y hace improbable la aceptación de su intervención. Pero cualquier crisis importante, de origen exterior o interior, replantea fatalmente el problema.

Cuatro consecuencias

De esta constatación desearía resaltar cuatro consecuencias relacionadas con la calidad de nuestras democracias actuales y con la imagen debilitada que dan de sí mismas, fuente del desinterés en la política. La primera se refiere a nuestras relaciones con los países en vías de desarrollo. En la mayoría de ellos, el poder se basa en la fuerza. La experiencia ha demostrado que hace falta tiempo, prudencia

y habilidad para evitar los golpes de Estado y convencer al ejército de que no salga de los cuarteles, sobre todo cuando la pobreza, el desempleo masivo y las desigualdades flagrantes asolan a una sociedad. En Brasil hace unos veinte años, en Mali hace unos diez, en Nigeria hace unas pocas semanas, lo que ha devuelto la democracia es la prudencia de los propios militares. No es precisamente algo frecuente; hay incluso dos ejemplos extremos. En el Congo-Brazzaville y en Madagascar, la comunidad internacional, muy especialmente Francia, ha conseguido "hacer llegar la democracia". En ambos sitios se llevaron a cabo elecciones siguiendo reglas nuevas y desconocidas, y se prestó apoyo a un personal totalmente nuevo e inexperto, sin relación alguna con las estructuras de fuerza. Los resultados han sido catastróficos en ambos casos. Ahora bien, nuestras democracias desarrolladas necesitan entusiasmo. En la actualidad, la gran causa es la de los derechos humanos. La política de moderación que acabo de esbozar no sólo resulta inaceptable para los defensores de los derechos humanos, sino que, además, seguramente la atribuirán a la cobardía de las autoridades políticas occidentales, y más aun cuando en esas elecciones se mezclan a menudo grandes intereses. La línea que consistiría en llevar a juicio a cualquier jefe de Estado represivo y a cualquier agente de esta represión daría lugar a innumerables guerras civiles e internacionales. He aquí una de las causas de la desconfianza democrática que tienen los mejores militantes de las democracias actuales. Segunda consecuencia de la fragilidad en la relación entre fuerza y derecho: la democracia es débil frente a aquellos que no respetan sus reglas.

El refuerzo constante y deseable de los derechos de la defensa, el control creciente y necesario sobre las conductas de la policía y la reticencia cada vez mayor a utilizar la fuerza pública, aseguran de hecho una creciente libertad de maniobra a todo tipo de delincuencia, especialmente a los traficantes de droga y de dinero. A los dictadores también, al igual que a aquellos que, aunque sea por causas puntuales, deciden recurrir a la fuerza. Aquí hay una debilidad de la democracia; pero es una debilidad deseada, que se ha vuelto necesaria por la lógica de un sistema basado, en primer lugar, en los derechos humanos. Sin embargo, en vez de describir este precio como algo que vale ampliamente la pena pagar, en nombre de los propios principios que lo justifican, la opinión pública se complace en contemplar con desdén la importancia

de nuestros regímenes y en culpabilizar a sus dirigentes. La tercera consecuencia que se deriva de esta observación es, en realidad, una inquietud. Ante el cambio tecnológico que estamos viviendo, el hecho de que se traduzca en una pobreza masiva, como en Estados Unidos o en Japón, o en una desocupación masiva, como en Europa, debilita la cohesión social de nuestras naciones. Nuestro milagro y maravilloso proceso de transmisión democrática del poder es un proceso propio de tiempos de tranquilidad. Temo que sea menos sólido de lo que la gente cree y que con poca cosa se pueda acabar con él.

La cuarta consecuencia que quisiera resaltar de esta constatación es, en realidad, más bien una pregunta: ¿cómo puede ser que la democracia, que fue defendida a veces con las armas, con un heroísmo terrible bajo tantos regímenes dictatoriales, se muestre, una vez instaurada, con una debilidad tan decepcionante? En un libro de una abrumadora erudición, *Democracia fuerte*, el profesor norteamericano Benjamin Barber señala que la democracia representativa nació no sólo al mismo tiempo que la libertad de prensa (lo que es harto conocido), sino también al mismo tiempo que la economía política moderna. Dentro del amplio esfuerzo que siguió a la Ilustración para someter las relaciones entre los hombres a la razón, lo primero que se quiso permitir, fomentar y organizar fueron los comportamientos mercantiles. Nuestra democracia

es racional como el *homo economicus*. Está destinada a optimizar los comportamientos de consumo y las posibilidades que derivan de éstos. Desde entonces, todas las dimensiones afectivas, interpersonales, artísticas o creadoras del individuo no tienen cabida en esta organización social. Es pues una organización frustrante casi por definición. Todos los elementos emocionales le son extraños. De aquí derivan, a la vez, una debilidad constitutiva de nuestra democracia representativa y una fuerte demanda de formas nuevas de democracia, principalmente participati-

vas. Dejo que el lector medite sobre esta tesis, pero observo que da buena cuenta de esta tristeza que la instancia política debe a sus límites.

La política y la gestión

No está todo dicho, ni mucho menos. También es necesario observar el aspecto "descendente" de la actividad política: la gestión. En el ámbito del ejercicio de las responsabilidades políticas, a mi entender, los principales parámetros son: la capacidad de escuchar y, por supuesto, el tiempo de la competencia, ya que los asuntos públicos son desesperadamente complejos, lo que es una razón más de defecto. No se puede ayudar a los necesitados sin conocer las causas y los detalles de su situación, es decir, sin haberlos escuchado antes. No se puede construir sin respetar los usos y costumbres de quienes van a utilizar dicha construcción. No se pueden elaborar buenas normas sin escuchar a aquellos los roles que se van a aplicar. No se puede reducir la violencia y hacer la paz a través de los acuerdos sin tener plena conciencia de las razones de esta violencia, sin pleno conocimiento de la historia y de la parte de legitimidad que tiene la causa adversa. Todo esto sólo es posible si el "discurso de legitimidad", es decir, el contenido de las campañas electorales y los compromisos adquiridos en esas ocasiones, es compatible con esta disponibilidad hacia los demás, esta ausencia de



Estrella de tres colores

(1975)

fanatismo y esta predisposición a alcanzar acuerdos. Sin embargo, la realidad es muy otra. Existe una maldición de las promesas y de los compromisos electorales. En la literatura política, éstos son los únicos textos que se elaboran sin ser sometidos a la crítica y al debate. Lo son en cambio los discursos públicos o parlamentarios y los documentos legislativos de todo tipo. Antes que cualquier otro, el primer objetivo de la redacción de los compromisos electorales es el de suscitar el entusiasmo de los simpatizantes y asegurar así mayorías en los congresos.

En el círculo reducido de afiliados, militantes, compañeros o camaradas, está más visto, o se considera descortés, el examen crítico de las propuestas demasiado osadas, porque es desmovilizador. Así nace el fanatismo y se desarrollan muchas propuestas muy poco razonables. Se plantea entonces el horrible dilema: ¿deben cumplirse o no las promesas? No hay ningún problema cuando se trata de promesas realistas y sobre las que es posible llegar a acuerdos. Pero, como es lógico, las más importantes serán las más simbólicas, es decir, normalmente las menos compatibles con un respeto escrupuloso de las realidades y con una negociación a fondo con los demás. Mantener este tipo de promesas electorales provoca a menudo grandes dificultades y costos excesivos. Pero, por supuesto, durante las campañas electorales, los símbolos, todo aquello sobre lo que no es posible transigir, son los que crean mayores entusiasmos... y los que provocarán las futuras decepciones.

El tempo político

Todavía es más importante, si cabe, la variable de la duración. Lleva mucho tiempo crear un nuevo derecho, un nuevo procedimiento o una nueva institución. Pocas veces pasan menos de tres o cuatro años entre la aparición de una idea y su traducción en forma legislativa (el impuesto progresivo sobre la renta ha requerido más de veinte años). Pero, sobre todo, el tiempo que necesita el público para manejar ese derecho y hacerlo suyo, para descubrir y utilizar el procedimiento, para adoptar y respetar una institución, se cuenta a menudo por decenas de años. Todo fue mucho más rápido en Francia en el caso del salario mínimo de inserción, pero es un caso único y todos aquellos que dependían de él tenían un gran interés en el procedimiento. En cambio, ¿cuánto tiempo ha sido necesario para que el mediador de la República y el

Consejo Constitucional ocupasen su espacio en nuestra vida colectiva? Por lo menos diez años. En resumen, en el ámbito de la gestión -y no en el de la competición-, el tratamiento consiste en estimular, facilitar, mejorar los textos y los procedimientos, y hacer un seguimiento atento. Así pues, resulta poco frecuente poder llevar a buen puerto un proyecto político importante o una gran reforma en el tiempo de un único mandato. Muchos alcaldes dicen sin tapujos que las realizaciones locales de las que se sienten más orgullosos sólo han sido posibles a lo largo de su tercer o cuarto mandato. Ahora bien, estos períodos en nuestro país duran seis años: más tiempo de lo habitual en la vida pública. La tendencia a limitar el número de mandatos consecutivos en la misma función, aunque es comprensible, implicará necesariamente una reducción de las ambiciones de los que ocupan los cargos. También sucede que la brevedad ocasional de las funciones gubernamentales es un obstáculo para los grandes proyectos políticos.

El control mediático

Sin embargo, lo esencial no es esto. Lo importante es que toda la información que recibe la opinión pública sobre la vida política proviene exclusivamente de los medios de comunicación. Son ellos los que dominan la relación entre "ascendente" y "descendente": la competición y la gestión. El sistema, que en la actualidad se basa principalmente en la prensa escrita, la radio y la televisión, tiene el monopolio absoluto sobre la información y la opinión sobre lo que sucede en la sociedad. Exceptuando algunos discursos ocasionales del Jefe del Estado, la palabra pública ya no tiene un acceso directo a la opinión pública. Ya es hora de plantearse cómo funciona este sistema y qué consecuencias comportan sus reglas y su práctica. Hace cuatro o cinco milenios, los faraones inventaron la profesión de escriba, con la finalidad de controlar lo que se decía sobre el poder. No entraremos en detalles: el sistema se ha mantenido aproximadamente igual hasta el siglo XIX. Y cuando se consiguió la libertad de prensa escrita, se inventaron la radio y la televisión, sobre las cuales muchos Estados, entre ellos Francia, han intentado restablecer el monopolio perdido. Para evitar cualquier ambigüedad en la comprensión de lo que sigue, quiero recordar mi decidida convicción no sólo de que no hay democracia sin libertad de prensa, sino también de que ha sido la libertad de

prensa la que ha permitido la expansión de la democracia. Sólo se trata aquí de poner de manifiesto los efectos perversos de ciertos modos de funcionamiento del sistema actual. Recordemos primero que las cosas son menos nuevas de lo que se cree: la opinión pública ha existido siempre. Catalina de Médicis lo sabía perfectamente cuando organizó en 1564 con su hijo Carlos IX, entonces rey de Francia, un viaje de dos años por el reino para reconciliar a los franceses con su Rey. En las asambleas de la Revolución se expresaban corrientes de opinión surgidas en la Francia más profunda. Y muchos gobiernos de la III República tuvieron unas relaciones execrables con la prensa.

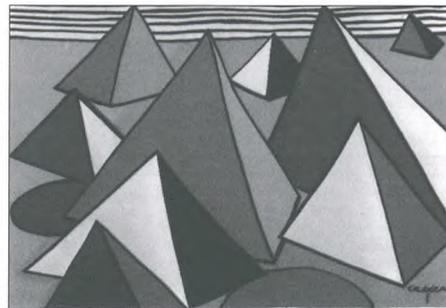
La aparición de los medios de comunicación audiovisuales cambió cualitativa y cuantitativamente las relaciones entre el poder y la opinión pública. Es en el momento de la emergencia de estas técnicas cuando se produce un cambio en la naturaleza de las relaciones entre el poder y la opinión pública, cuyos efectos negativos ocultan gravemente la mejora de la democracia que, de otra manera, podría haberse dado. La televisión y la radio están presentes prácticamente en todos los hogares, lo cual no tiene nada que ver, en términos de influencia, con el escaso diez o quince por ciento de ciudadanos a los que alcanza la prensa escrita. La televisión es el medio dominante no tanto porque transmite lo esencial de las informaciones -la prensa escrita siempre es más rica-, sino porque establece una jerarquía de los temas, hace una selección de lo que se dice y lo que no se dice, impone las interpretaciones dominantes y da validez a los símbolos.

De la palabra a la imagen

Más que atacar ciertas prácticas periodísticas, resulta esencial analizar primero las limitaciones técnicas que tiene el sistema y contra las que ni siquiera los mejores periodistas pueden luchar. La primera se refiere a la imagen. Por su propia naturaleza, mucho más impactante que el texto, la imagen busca la emoción, el drama, y soporta muy mal la explicación, el

razonamiento y la contextualización. La imagen no se ajusta a lo complejo y tiende a alejarlo de la percepción pública. Esto potencia soluciones prefabricadas, "efectos de anuncio" sin continuación y simplificaciones absurdas. Segunda característica: la velocidad. La electricidad permite que cualquier noticia importante se difunda por el planeta en unos minutos y que decenas de miles de periodistas entrevistan a decenas de miles de personalidades en los minutos siguientes a un gran acontecimiento: la detención de Pinochet, el asesinato de Rabin, los primeros ataques sobre Kosovo. En estas condiciones, todo el mundo habla antes de haber reflexionado, es decir, antes de haber considerado suficientemente el contexto, las causas, las circunstancias y las consecuencias de una información y de haber contrastado su opinión con la de los demás. Volvemos al grado cero del discurso político "por impulsos". El conocimiento, la experiencia, la profesionalidad y la propia información desaparecen ante esta consagración de lo intuitivo. Los sondeos de opinión no solucionan nada. Además, la palabra "opinión" utilizada en este caso es exagerada. Opinión viene de "opinar", es decir, aprobar, y existe opinión cuando se ha llegado a un acuerdo sobre un punto de vista. Ahora bien, hace ya mucho tiempo que el principal lugar de transmisión de las noticias era "el bar de la esquina", en el que alguien comentaba el periódico del día para los demás y donde se llevaba a cabo una discusión.

La televisión nos toma aisladamente, a cada uno en su casa, y los sondeos registran una simple



La pirámide naranja

(1973)

suma algebraica de impulsos, intuiciones y actos reflejos expresados al margen de toda confrontación con la información, de la profesionalidad o incluso de otros pareceres. El resultado de todo esto, llamado exageradamente opinión pública y puesto en forma de tablas y gráficos, tiene un peso muy grande para cualquier gobierno. Por lo tanto, se hace extremadamente difícil seguir políticas rigurosas en ámbitos como la seguridad social o la agricultura, y aun más poner suficiente convicción y dedicar suficiente tiempo para tratar con la paciencia, la serenidad, la continuidad y la coherencia necesarias problemas como el de la violencia en los barrios periféricos. Los que responden a los sondeos quieren, a su vez, cosas espectaculares y efecto anuncio. Todos estos procedimientos tienden a dar un carácter instantáneo a la relación entre gobernantes y gobernados. Desaparece el largo plazo, que, sin embargo, constituye la mejor herramienta para crear. Tercera característica técnica: la competencia. Existe un exceso de medios de comunicación. Cada uno en su ámbito, escrito, hablado o televisado, lucha contra los demás para encontrar su clientela. La única manera de imponerse es hacer más "ruido" que los demás. Por tanto, se busca la exclusividad, la noticia de primera página, la voluntad de ser el primero en anunciar algo. En esta carrera infernal, la primera víctima es el tiempo necesario para comprobar las noticias y el objetivo más buscado es la denuncia del escándalo. Así es como cualquier individuo sospechoso se convierte en culpable; cualquier rumor en una información y cualquier propuesta se equiparan a una decisión adoptada. Además, por cuestiones de prestigio, ninguno de los órganos de los medios de comunicación soporta que se desmientan sus informaciones. Así se lo hacen saber con claridad a los pobres responsables políticos que se atreven a hacerlo. Un político experimentado no desmiente nunca nada. La historia dirá... mucho después. Todos estos problemas se mezclan entre sí. La prensa escrita, que podría contribuir a restaurar las dimensiones de complejidad y de duración, y que tendría tiempo de comprobar la veracidad de su información, se deja llevar, en cambio, por la televisión en la jerarquización de los temas, el exceso de simplificación y la carrera hacia la noticia de portada. El resultado es de sobra conocido. La información real desaparece del sistema mediático, que se consagra cada vez más al espectáculo. En lugar de presentar los resultados de una política, se hace debatir a los políticos entre ellos,

dejando tiempo sólo para hacer afirmaciones o condenas, pero sin poder explicar realmente las cosas. La prensa ejercía antes un control sobre los datos y las cifras que se exponían, señalando y corrigiendo las estadísticas falseadas. De pronto, las cifras, que siguen siendo esenciales, ya no pueden servir en el debate político. La omnipresencia de los medios de comunicación es, además, un obstáculo para la discreción necesaria en toda negociación o en todo proceso de toma de decisión. Cualquier negociación realizada en público está condenada al fracaso. Y cuando se está tomando una decisión, si se considera que un medio o una técnica resultan inadecuados y se hace público, en lugar de considerarse que la buena decisión consiste en encontrar una vía alternativa para alcanzar el mismo objetivo, el cambio de estrategia se convierte en una derrota política. Por eso, las decisiones se meditan menos, se gobierna más por intuición y se negocia mal. De hecho y para resumir, el sistema mediático, deseo de espectáculos, se centra casi exclusivamente en la competencia entre políticos y olvida casi por completo la gestión. Y lo que es aun más grave, recorta los horizontes. No se tiene en cuenta ninguna información, reflexión o debate si su horizonte sobrepasa los cinco o seis meses siguientes, o como máximo la siguiente campaña electoral. Los proyectos de gran envergadura resultan imposibles o prohibidos y los buenos resultados de gestión quedan prácticamente eliminados. A grandes rasgos, del político sólo se ve la corrupción. Ésta es, sin duda, la principal razón del descrédito de la función política.

La decepción del político

Es absurdo esperar que una reforma o una mejora sustancial provengan únicamente de la política. Solamente a partir de una conciencia cívica común entre actores y comentaristas se podrán producir evoluciones capaces de rectificar la situación, y de las que, por lo demás, tenemos ya algunos ejemplos. Existe un nuevo "periodismo cívico" americano que augura muy buenas perspectivas. Pero, de momento, y a pesar de esto, la situación tiende más bien a empeorar. Hay indudablemente un descrédito de la política en la opinión pública debido tanto al espectáculo que ofrecen los medios de comunicación como a la sensación de impotencia o de ineficacia creciente que dan nuestras autoridades públicas. Sin embargo, también existe (a pesar de que se muestra menos) una desmoralización en los propios politi-

cos. Se resignan cada vez más a no tener ni ambiciones ni proyectos que vayan más allá de la siguiente campaña electoral, ya que no hay ni espacios ni medios dispuestos a darlos a conocer.

También es necesario comentar brevemente otros tres factores, cada uno de los cuales merecería un estudio profundo. El primero es que toda esta decepción sería menos amplia y menos profunda si, al menos, la instancia política diese la impresión de ser eficaz. Sin embargo, ante el aumento de la inseguridad, de la violencia civil, de la desocupación y de la pobreza, no se pronuncian ni la Sociología ni la Economía. El oficio de los políticos consiste en hacer aceptar y llevar a la práctica las soluciones que la Filosofía y la ciencia proponen: no tienen que inventarlas ellos mismos. Como están obligados a hacerse ver y a apretar manos, es imposible que además se dediquen a investigar en el ámbito de las ciencias sociales o que piensen, en el sentido más exigente del término. La impotencia de las ciencias económicas contemporáneas ante el desempleo y la pobreza la pagan, de hecho, los políticos. Un nuevo Keynes no conseguirá, además de prosperidad y empleo, la adhesión al sistema.

El segundo factor tiene que ver con la filosofía económica dominante. No es por casualidad que se desacredite siempre que se puede al Estado y, por lo tanto, a la autoridad de la norma. El hecho de describir sistemáticamente la intervención pública en la regulación social como algo pernicioso y portador de efectos perversos más fuertes que los efectos positivos esperados, tiene necesariamente como consecuencia orientar fuertemente los comentarios periodísticos e influir sobre la elección de una carrera. Así, en Francia, nuestro sistema de Escuelas Superiores sigue garantizando buenos profesionales para servir al Estado; pero éstos abandonan la alta función pública mucho antes que en el pasado, en beneficio casi exclusivo del sector privado y cada vez menos de la carrera política. Aunque Francia no es, ni de lejos, el peor ejemplo de esta evolución, todo parece apuntar a una mediocridad

creciente del personal político.

El tercer factor es más delicado que tiene una importancia fundamental: se trata de la manera en que los periodistas y la opinión pública se vengan de la decepción que les inspiran los políticos. No se les concede el respeto que no merecen por sus audiencias, realizaciones y eficacia insuficientes o desconocidas, al no haber sido comentadas por nadie; pero se les exige que estén totalmente sometidos a sus electores y que tengan un nivel de moralidad muy distinto que el de la media de los ciudadanos.

En la política sólo habrá "temporarios"

Se entra en política sabiendo de antemano que, sea como sea, se recibirán insultos. Por muy larga que resulte la constante histórica, este aspecto no deja de ser siempre intolerable para el cónyuge o los hijos. Sin embargo, durante mucho tiempo, había compensaciones en forma de una relativa estabilidad, bienestar y respeto. Estas compensaciones están desapareciendo. La enorme presión social para evitar la acumulación de mandatos consecutivos posibles, aunque es perfectamente comprensible como esperanza de una democracia más activa, agrava la inestabilidad de las carreras políticas y disminuye la calidad de la profesionalidad, que, sin embargo, es necesaria. La política también se aprende y ese proceso dura mucho tiempo. Al final, en la política sólo habrá



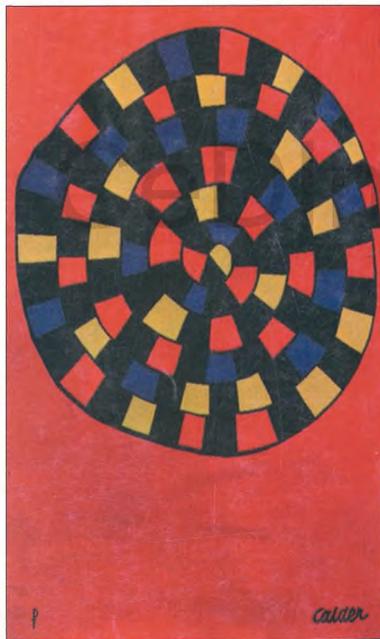
Círculos y espirales

"temporarios". También hay que hablar de dinero. Para los cuadros superiores -¿y qué es un diputado sino un cuadro superior, o un alcalde, sino un jefe de empresa?- los salarios públicos son bajos, y sin embargo es necesario aparecer en público, recibir autoridades y muchas veces mantener dos domicilios al mismo tiempo. La acumulación de los mandatos y los regalos de las empresas eran soluciones parciales. Por excelentes razones, que hay que aprobar, todo esto se ha prohibido o lo será. Entonces, falta alguna compensación. A diferencia del mundo anglosajón o escandinavo, Francia sigue siendo un país donde el hecho de haber "fumado un

porro" en la juventud o no tener costumbres conyugales irreprochables no son un impedimento para ejercer la política. ¿Por cuánto tiempo? De todas maneras, la transparencia total, la desaparición de toda intimidad y la violación permanente de la vida privada por parte de unos medios de comunicación cada vez más encarnizados hacen que la situación roce ya lo intolerable. Escoger la carrera política es una opción que un joven cuadro puede proponer cada vez con más dificultad a su cónyuge.

Para los políticos honestos, es decir, para la aplastante mayoría de la profesión, la fórmula "todos están podridos" expresa hasta qué punto es inaceptable la posición que les atribuye la sociedad contemporánea.

¿Cuál es la conclusión? Al pretender que nuestros políticos sean santos, pobres y estén sujetos a la inseguridad laboral, vamos a acabar coincidiendo con el aforismo de Pascal: "Quien quiere hacer el ángel hace la bestia". Lo esencial es que este malestar político es el producto de una inquietud social más amplia y profunda. Cuando nuestras sociedades recuperen el crecimiento, el pleno empleo y la paz social, el político volverá a ser respetado. La palabra la tienen las ciencias sociales más que los políticos. En lo inmediato, antes de hablar de política en sentido estricto, habría que ayudar a nuestras sociedades a encontrar el sentido de la norma y la necesidad de la autoridad pública. Todos los que tienen autoridad para pensar y decir deberían colaborar en esta relegitimación de la función del Estado. Por último, la libertad de prensa se traduce en una especie de licencia cívica destructora de nuestras reglas sociales y políticas. Hay que volver a encontrar una deontología de lo que se dice sobre el poder, un código de conducta cívica que guíe tanto el comentario como la acción. Ni la ley ni la autoridad podrán conseguir nada; lo que hay que hacer es crear una conciencia común. □



Serpiente o vidriera

(1970)

* Este texto fue publicado originalmente en la revista *Éudes*, 14, Rue d'Assas, 75006, París.